La recta final de la Legislatura: Madrid 2010¹

Sumario: RESUMEN.—I. INTRODUCCIÓN GENERAL.—II. PRODUCCIÓN LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—2.1. Rasgos generales de la actividad legislativa.—2.2. Las previsiones económico-financieras: los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010.—2.3. Las medidas fiscales y administrativas de acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad.—2.4. Otras disposiciones legales aprobadas por la Comunidad de Madrid.—2.4.1. Creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid.—2.4.2. La Autoridad del Profesor.—2.4.3. Las instalaciones aeronáuticas de la Comunidad.—2.4.4. Medidas Urgentes para la reducción del déficit público.—2.4.5. Medidas Fiscales para el fomento de la actividad económica.—2.4.6. Creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid.—2.4.7. Creación del Colegio Profesional de Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid.—III. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA POR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.—3.1. Líneas generales de su ejercicio por el Gobierno de la Comunidad.—3.2. Reglamentos de carácter general en desarrollo de prescripciones legales.—3.3. Regulación de sectores de actividad administrativa específicos.—3.4. Disposiciones administrativas.—3.5. Regulación de órganos administrativos.—IV. LA DINÁMICA POLÍTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.—4.1. La celebración del «Debate sobre el estado de la Región».—4.2. La celebración de un debate monográfico sobre asuntos de interés general.—4.3. La designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid.—4.4. La reestructuración del Ejecutivo autonómico.—V. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.—5.1. Composición de la Asamblea de Madrid.—5.2. Estructura del Gobierno.—5.3. Tipo de Gobierno.—5.4. Cambios en el Gobierno.—5.5. Investidura, moción de censura y cuestión de confianza.—5.6. Mociones de reprobación.—VI. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA.—6.1. Sesiones celebradas.—6.2. Comisiones constituidas.—6.3. Ponencias constituidas.—6.4. Iniciativas legislativas.—6.5. Iniciativas parlamentarias no legislativas.—6.6. Debates generales

[★] Germán FERNÁNDEZ FARRERES; Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ; Letrado de la Asamblea de Madrid y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

¹ El presente Estudio tiene su base en la colaboración de los autores al *Informe Comunidades Autónomas 2010*, dirigido por Joaquín TORNOS MÁS y editado por el Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2011

resoluciones parlamentarias más importantes.—6.7. Reformas del Reglamento de la Asamblea de Madrid.—6.8. Normas interpretativas y supletorias del Reglamento de la Asamblea de Madrid.—6.9. Instituciones similares al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.—6.9.1. Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.—6.9.2. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.—6.9.3. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.

RESUMEN

La conclusión del año 2010, y, por ende, transcurridos mil días del segundo gobierno de la Presidenta Esperanza Aguirre Gil de Biedma, anuncia la recta final de la VIII Legislatura y la apertura de la campaña electoral para la celebración de los próximos comicios electorales autonómicos, el 22 de mayo de 2011.

2010 ha sido un típico año intermedio entre procesos electorales, en el ecuador de la VIII Legislatura autonómica. La estabilidad institucional ha presidido el panorama política, en un marco en el que la Presidenta de la Comunidad goza del apoyo de una amplia mayoría parlamentaria en la Asamblea de Madrid, en virtud de los resultados electorales obtenidos por la candidatura del Partido Popular.

No obstante, diversos acontecimientos han marcado la dinámica política de la Comunidad, no sólo por su proyección en los medios de comunicación social, sino por su trascendencia institucional.

Así, debe recordarse que antes del verano se registró una huelga en el Metro de Madrid, en la que no fueron respetados los servicios mínimos establecidos por la Administración autonómica durante dos días, con la consecuencia de que el servicio público de transporte suburbano se interrumpió completamente en la capital de España.

La Comunidad, como el resto del Estado español, registraría en el propio año otra huelga, en este caso una calificada de “huelga general”, convocada para el día 27 de septiembre, durante la cual se respetaron los servicios mínimos.

De igual modo, ha de dejarse constancia del colapso registrado en el aeropuerto de Madrid-Barajas al inicio del puente del mes de diciembre, consecuencia del abandono de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos. A raíz de la misma el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma por primera vez en nuestra historia constitucional.

Por lo que respecta a las formaciones políticas, el Partido Popular pospone la confección y cierre de sus listas electorales a abril de 2011, el Partido Socialista de Madrid ha celebrado elecciones primarias, eligiendo como candidato a la Presidencia de la Comunidad a Tomás Gómez, e Izquierda Unida ha elaborado sus listas electorales, designando como candidato a la Presidencia a Gregorio Gordo.

Al igual que en 2009, en 2010 se ha modulado una línea de tendencia consolidada durante los siete años precedentes, consistente en la notable reducción de la producción legislativa de la Asamblea de Madrid: frente a las tres leyes aprobadas en 2008, en 2009 se aprobaron diez y nueve se han aprobado en 2010, cuatro en el primer periodo de sesiones del año —febrero-junio—, la quinta en una sesión extraor-

dinaria celebrada durante el mes de julio y las otras cuatro en el segundo periodo de sesiones —septiembre-diciembre—. Empero, el referido dato cuantitativo sigue confirmando la minoración de la actividad legislativa del Parlamento madrileño, de acuerdo con la voluntad política expresamente manifestada al inicio de su primer mandato por la Presidenta de la Comunidad.

De forma semejante a lo sucedido con la producción legislativa, el Ejecutivo regional ha mantenido la tendencia a la reducción en el ejercicio de la potestad reglamentaria. El número de Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno que han accedido al Boletín Oficial es, tan sólo, de noventa y tres; se trata de la cifra anual más baja desde la constitución de la Comunidad de Madrid.

La dinámica política de la Comunidad ha estado presidida por la estabilidad, no obstante una pequeña reestructuración del Gobierno operada por su Presidenta, de tal modo que de las catorce Consejerías establecidas al inicio de la Legislatura en la actualidad el Consejo de Gobierno de la Comunidad está conformado sólo por ocho, además de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

La actividad parlamentaria registrada en la Asamblea de Madrid durante el año 2010 ha sido, en términos cuantitativos, muy ligeramente inferior a la correspondiente al precedente 2009.

I. INTRODUCCIÓN GENERAL

La conclusión del año 2010, y, por ende, transcurridos mil días del segundo gobierno de la Presidenta Esperanza Aguirre Gil de Biedma, anuncia la recta final de la Legislatura en curso y la apertura de la campaña electoral para la celebración de los próximos comicios electorales autonómicos, el 22 de mayo de 2011.

El vigésimo séptimo año de autogobierno, a tenor del panorama político diseñado por los ciudadanos madrileños con ocasión de las elecciones celebradas el último domingo de mayo del año 2007, se ha caracterizado por la estabilidad institucional y la concreción de las líneas políticas, gubernamental y de oposición, que habrán de cerrarse a la conclusión de la VIII Legislatura de la Comunidad de Madrid.

No puede omitirse, para ponderar la referida estabilidad institucional, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid goza del apoyo de una amplia mayoría parlamentaria en la Asamblea de Madrid, en virtud de los resultados electorales obtenidos por la candidatura del Partido Popular.

No obstante, diversos acontecimientos han marcado la dinámica política de la Comunidad de Madrid, no sólo por su proyección, de forma sonora, en los medios de comunicación social, sino, por cuanto al presente Estudio interesa, por su trascendencia institucional.

Así, debe recordarse que antes del verano se registró una huelga en el Metro de Madrid. Los sindicatos de trabajadores de Metro anunciaron la huelga contra el Proyecto de Ley 4/2010, de Medidas Urgentes de la Comunidad de Ma-

drid, que incluía, entre las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, una rebaja equivalente al 5% de salarios o al 2,15% de gastos de personal, argumentando que un convenio colectivo es ley entre las partes y no se puede romper de forma unilateral. Después de algunas jornadas de paros parciales, se convocó la huelga, dictando la Administración autonómica el Decreto 30/2010, de 2 de junio, por el que se fijaron los servicios mínimos. Dichos servicios mínimos no fueron respetados por los trabajadores durante dos días, con la consecuencia de que el servicio público de transporte suburbano se interrumpió completamente en la capital de España, estimándose que los viajeros afectados fueron 3.513.366 (1.757.496 el día 29 y 1.755.870 el día 30). Sobre estos sucesos no puede omitirse que, ya en enero de 2011, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado “ilegal” la huelga de Metro del 29 y 30 de junio de 2010, jornadas en las que no se cumplieron los servicios mínimos; la sentencia estima la demanda interpuesta por la empresa Metro de Madrid contra los sindicatos con representación en el suburbano madrileño (CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Conductores, Sindicato Libre, Sindicato de Técnicos y Sindicato de Estaciones), el comité de huelga y el comité de empresa.

La Comunidad, como el resto del Estado español, registraría en el propio año otra huelga, en este caso una calificada de “huelga general”, convocada por las centrales sindicales para el día 27 de septiembre. En este supuesto los servicios mínimos fueron establecidos mediante Decreto 68/2010, de 23 de septiembre, habiendo sido respetados por los trabajadores.

De igual modo, ha de dejarse constancia del colapso registrado en el aeropuerto de Madrid-Barajas al inicio del puente del mes de diciembre. El abandono sistemático de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, en efecto, determinó una situación insólita en el aeropuerto de la capital, así como en el resto de España, a raíz de la cual se decretó por el Gobierno de la Nación el estado de alarma por primera vez en nuestra historia constitucional.

Tampoco puede omitirse que la tensión política se ha proyectado en el seno de las tres formaciones con representación parlamentaria, lo que es propio de los primeros tanteos de poder interno en orden a la elaboración de las futuras listas electorales.

En la mayoría, han constituido portada de los diarios impresos de tirada nacional las discrepancias de criterio exteriorizadas entre la Presidenta y el Vicepresidente de la Comunidad, de un lado, y el Alcalde y el Vice-Alcalde de su principal Municipio, de otro. Por lo que se refiere a las listas electorales, esta formación no las conforma y hace públicas sino prácticamente en el momento de convocatoria de las elecciones, lo que nos remite al mes de abril de 2011.

Por lo que respecta a la principal fuerza política de la oposición, el liderazgo de Tomás Gómez se ha consolidado oficialmente tras las “primarias” celebradas para la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al vencer en las mismas a la candidata de Ferraz, Trinidad Jiménez. El resultado definitivo de la disputa fue que el líder del Partido Socialista de Madrid ganó por 7.613 votos (51,8%), frente a los 7.055 (48%) obtenidos por la ministra de

Sanidad; es decir, por 558 votos de diferencia. Y además con una participación muy alta, del 80,96%.

En Izquierda Unida, como es tradición en esta formación, ya se han cerrado las listas electorales, prácticamente con un año de antelación a los comicios, siendo designado candidato el actual Portavoz y Presidente del Grupo Parlamentario, Gregorio Gordo Pradel. No figura en las mismas la anterior Portavoz, la Sra. Sabanés Nadal.

2010 ha sido, además, un año donde, afortunadamente, no ha habido que asistir en el territorio de la Comunidad de Madrid al azote terrorista.

2010 ha sido, también, el año en el que, de un lado, ha entrado en vigor en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de hospital y médico en Atención Especializada, y, de otro, se ha aprobado una ley que generó un amplio debate social, la de Autoridad del Profesor.

No podría cerrarse este marco general sin, siquiera de forma telegráfica, dejar constancia del impacto que la crisis financiera y económica que asola occidente ha tenido, tiene y tendrá, en la sociedad madrileña. Destapada de forma decidida a la conclusión del período estival de 2008, con la consecuencia directa de un preocupante incremento del desempleo, se trata de una crisis cuyos efectos no estamos todavía en condiciones de definir de una forma cierta y respecto de la que las instancias europeas comienzan a manifestar su preocupación por su especial incidencia en nuestro país. Desde la perspectiva institucional que nos ocupa, debe dejarse constancia de que la Asamblea de Madrid celebró a comienzos de año, concretamente el día 23 de febrero, un “Debate monográfico sobre la situación económica en la Comunidad de Madrid”. Debate que resultó complementado con la adopción de las medidas contenidas, primero, en la Ley 4/2010, de Medidas Urgentes, por el que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 28 de junio), y, posteriormente, en la Ley 5/2010, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica (aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 8 de julio). Tras el período estival, la crisis centró el anual “Debate sobre el estado de la Región”, celebrado los días 14 y 15 de septiembre.

II. PRODUCCIÓN LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

2.1. Rasgos generales de la actividad legislativa

De igual modo que en 2009, en el año 2010 se ha modulado una línea de tendencia consolidada durante los años precedentes del Gobierno Aguirre, consistente en la notable reducción de la producción legislativa de la Asamblea

de Madrid. Sirva recordar que, frente a las tres aprobadas en 2008, en 2009 se aprobaron diez normas con rango, valor y fuerza de ley, y nueve se han aprobado en 2010, cuatro en el primer periodo de sesiones del año —febrero-junio—, la quinta en una sesión extraordinaria celebrada durante el mes de julio y las otras cuatro en el segundo periodo de sesiones —septiembre-diciembre—.

Empero, el referido dato cuantitativo sigue confirmando la minoración de la actividad legislativa del Parlamento madrileño, de acuerdo con la voluntad política expresamente manifestada al inicio de su primer mandato por la Presidenta de la Comunidad.

La Asamblea de Madrid, en efecto, se había situado en el año 2002 al frente de los Parlamentos autonómicos en la producción normativa, tan sólo superada en número de leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra y el Parlamento de Cataluña, constituidos con anterioridad e, inicialmente, con un nivel competencial sensiblemente superior. Frente a dicha tendencia, la VII Legislatura representó —con una única ley en 2003, siete leyes en 2004, ocho en 2005, cuatro en 2006 y dos en 2007; esto es, un total de veintidós leyes— el periodo con una actividad legislativa más reducida desde la constitución de la Comunidad en 1983 —obviamente con exclusión de la efímera y singular VI Legislatura (mayo-septiembre 2003), en la que se aprobó una única ley—.

La VIII Legislatura responde al perfil de su predecesora, pues a las cinco leyes aprobadas en el tramo de 2007 correspondiente a la misma, se suman las referidas tres que salieron adelante en 2008, las diez correspondientes a 2009 y las nueve incorporadas al ordenamiento jurídico autonómico el presente año —es decir, un total de veintisiete en esta Legislatura—, que seguidamente se analizan en detalle.

Apuntado lo anterior, de forma genérica, hemos de destacar que el objeto de las leyes que se han incorporado al ordenamiento jurídico madrileño ha estado constituido, de un lado, por el establecimiento de las prescripciones anuales que conformarán el ámbito económico-financiero de la Comunidad para el año 2011, con las consabidas medidas de acompañamiento —en el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 17.930.934.567 euros—, de otro, por la modificación de distintas normas en orden a afrontar la crisis económica y liberalizar actividades, comportando algunas innovaciones de notable alcance sustantivo, y, por último, por determinaciones puntuales, como la creación de tres Colegios Profesionales, la afirmación de la Autoridad del Profesor o la disciplina del régimen de las instalaciones aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

El resultado es que, junto a la ley presupuestaria y a su, ya consolidada, “ley de acompañamiento”, la actividad legislativa en 2010 se ha circunscrito a la aprobación de las siguientes leyes:

- Ley 1/2010, de 24 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 18 de fe-

- brero de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 178, de 25 de febrero, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 71, de 24 de marzo, y con carácter de publicidad material en los términos estatutariamente establecidos en el *Boletín Oficial del Estado* número 184, de 30 de julio—.
- Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 10 de junio de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 198, de 17 de junio, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 154, de 29 de junio, y con carácter de publicidad material en los términos estatutariamente establecidos en el *Boletín Oficial del Estado* número 238, de 1 de octubre—.
 - Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 17 de junio de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 200, de 24 de junio (corrección de errores en el posterior número 203, de 8 de julio), a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 154, de 29 de junio (corrección de errores en el posterior número 171, de 19 de julio), y con carácter de publicidad material en los términos estatutariamente establecidos en el *Boletín Oficial del Estado* número 238, de 1 de octubre—.
 - Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por el que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 28 de junio de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 202, de 1 de julio, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 154, de 29 de junio, y con carácter de publicidad material en los términos estatutariamente establecidos en el *Boletín Oficial del Estado* número 238, de 1 de octubre—.
 - Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 8 de julio de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 202, de 1 de julio, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 154, de 29 de junio, y con carácter de publicidad material en los términos estatutariamente establecidos en el *Boletín Oficial del Estado* número 283, de 23 de noviembre—.

- Ley 6/2010, de 25 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 212, de 21 de octubre, y a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 267, de 8 de noviembre, estando pendiente de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*—.
- Ley 7/2010, de 25 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 212, de 21 de octubre, y a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 267, de 8 de noviembre, estando pendiente de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*—.
- Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada los días 21 y 22 de diciembre de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 227, de 27 de diciembre, y a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 310, de 29 de diciembre, estando pendiente de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*—.
- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público; aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada los días 21 y 22 de diciembre de 2010 —publicada, sucesivamente, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 227, de 27 de diciembre, y a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 310, de 29 de diciembre, estando pendiente de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*—.

Lo expuesto, en el bien entendido sentido de que tan sólo se constata en esta crónica un dato estadístico, pues legislar más no implica de forma necesaria gestionar de modo más eficaz o eficiente los intereses de los ciudadanos madrileños.

Sintetizado lo anterior, antes de analizar el contenido sustantivo de las anunciadas disposiciones legales, casi ocioso resulta destacar el absoluto protagonismo del Ejecutivo regional en el ejercicio de la iniciativa legislativa, confirmando una realidad indiscutible en la Comunidad de Madrid.

No es insignificante ponderar que de las nueve leyes que han alcanzado vigencia, seis tienen su origen en sendas iniciativas gubernamentales, es decir, todas menos las tres iniciativas por las que finalmente se ha procedido a la creación de tres Colegios Profesionales. De las iniciativas gubernamentales tan sólo queda

pendiente para el próximo periodo de sesiones el Proyecto de Ley 5/2009, de la Cañada Real Galiana —en fase de Ponencia—, y el Proyecto de Ley 7/2010, por el que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros —que ha sido aprobado en sesión extraordinaria celebrada en enero de 2011, incorporándose al ordenamiento jurídico autonómico como Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros—.

Respecto de las Proposiciones de Ley, las tres que se han convertido en Ley fueron iniciativas presentadas en el año 2009 y todas ellas relativas a la creación de Colegios Profesionales —en concreto: la 1/09 el de Educadoras y Educadores Sociales; la 3/09 el de Ingenieros en Informática; y la 4/09 el de Ingenieros Técnicos en Informática—. Ninguna de las ocho formalizadas en 2010 se ha convertido en ley. De las mismas ha de tenerse en cuenta que una, la Proposición de Ley 1/2010, de Iniciativa Legislativa Popular, formalizada en el Registro general de la Cámara con el referido número de orden el día 3 de enero, tenía por objeto la modificación del artículo 4.2 de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos en la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 1/2000. Siendo sus promotores la Asociación para el Bienestar de los Animales y la Organización El Refugio, la Mesa de la Diputación Permanente no la admitió a trámite, en su reunión de 19 de enero, por adolecer de defectos formales. Posteriormente volvió a ser presentada por sus promotores, recibiendo el número de orden de Proposición de Ley 2/10; la Mesa, tras admitirla a trámite la remitió al Consejo de Gobierno y considerando la no conformidad con la tramitación manifestada por el mismo, acordó en su sesión de 13 de octubre interrumpir la tramitación, archivándola sin ulteriores actuaciones.

Las restantes iniciativas, debidas a los Grupos Parlamentarios de la oposición, son las siguientes:

- Proposición de Ley 3/2010, de Modificación del Reglamento de la Asamblea de Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; fue rechazada en el trámite de toma consideración en sesión plenaria de 6 de mayo, editada en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 688.
- Proposición de Ley 4/2010, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de una Comisión Permanente No Legislativa de Inmigración y Cooperación al Desarrollo; fue rechazada en su toma en consideración en sesión plenaria de 10 de junio, editada en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 712.
- Proposición de Ley 5/2010, de Reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; está pendiente de toma en consideración.
- Proposición de Ley 6/2010, para garantizar el principio genérico de no

discriminación por identidad de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; fue rechazada en su toma en consideración en sesión plenaria de 24 de junio, editada en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 726.

- Proposición de Ley 7/2010, del Voluntariado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; está pendiente de toma en consideración.
- También lo está la Proposición de Ley 8/2010, presentada por el propio Grupo, de Creación del Colegio Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad de Madrid.

El resultado es que una Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, no fue admitida a trámite —1/10—, otra, también de Iniciativa Legislativa Popular, ha decaído —2/10—, tres, formalizadas por los Grupos Parlamentarios, han resultado tramitadas y rechazadas —3, 4 y 6/10— y están pendientes de tramitación otras tres, también debidas a los Grupos —5, 7 y 8/10—.

Durante el presente año se ha corregido una práctica procedimental que se estaba convirtiendo en un rasgo general de la producción legislativa de la Cámara, consistente en la omisión del trámite de Ponencia. Recuérdesse que en 2009, de los ocho Proyectos de Ley tramitados y que finalmente se incorporaron al ordenamiento vigente en seis no se constituyó Ponencia ni, en consecuencia, se elevó a la Comisión el oportuno Informe.

Un último dato general de la producción normativa autonómica merece ser destacado. Durante el año 2010 se ha recurrido a la vía de la delegación legislativa prevista por el artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía. Se quiebra así una consolidada línea legislativa, afirmada en el ámbito de la Comunidad de Madrid desde su constitución en 1983. De hecho, tan sólo en una ocasión el Parlamento autonómico procedió a delegar en el Gobierno, concretándose la delegación en la aprobación por el Gobierno de la Comunidad del Decreto Legislativo 1/2000, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid; un Texto Refundido, por lo demás, cuyas prescripciones han sido objeto de reforma por sucesivas leyes de la Asamblea de Madrid todos los años, sin excepción y vía ley de acompañamiento.

La Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en su Disposición Final Primera, autorizó al Gobierno de la Comunidad para que, en el plazo de diez meses, elaborara un texto refundido de la normativa que, con rango de Ley, hubiera aprobado la Comunidad en materia de tributos cedidos por el Estado y vigente a 1 de enero de 2010. La autorización fue ampliada por la Disposición Final Tercera de la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica, a las disposiciones relativas a tributos cedidos por el Estado contenidas en la mencionada Ley. En sus términos, se aprobó por el Consejo de Gobierno el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.

La aprobación del texto único tiene como finalidad principal dotar de mayor claridad a la normativa autonómica en materia de tributos cedidos por el

Estado, mediante la integración en un único cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a dicha materia, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración Tributaria de la Comunidad. El Texto Refundido se estructura en:

- un Título I dedicado a los impuestos en particular sobre los que la Comunidad de Madrid ha ejercido sus competencias normativas; el Título se compone de seis capítulos, dedicados a los seis tributos afectados: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el Juego y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
- un Título II que contiene diversas obligaciones formales establecidas en la aplicación de los tributos cedidos por el Estado; el Título se compone de tres capítulos, dedicados a las obligaciones formales en relación con los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y uno final sobre habilitaciones y presentaciones telemáticas de declaraciones.
- una Disposición Adicional relativa al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos;
- cuatro disposiciones transitorias dedicadas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas; y a la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar aplicable, por un lado, al juego del bingo, y, por otro, a los casinos de juego en caso de nuevas autorizaciones; y
- cuatro disposiciones finales que recogen la entrada en vigor de diversas deducciones y de los mínimos por descendientes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Para concluir, simplemente recordar que, frente a la cuestionable tendencia que se ha generalizado en otras Comunidades Autónomas a raíz de la aprobación de la reforma de sus Estatutos de Autonomía, la norma institucional básica de la Comunidad de Madrid no prevé la aprobación por el Gobierno de legislación de urgencia, por lo que la figura del Decreto-ley está inédita en la Comunidad.

2.2. Las previsiones económico-financieras: los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010

La amplia mayoría electoral obtenida por el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno regional ha permitido, de nuevo, la aprobación en sede parlamentaria, antes del comienzo del ejercicio, de las previsiones presupuestarias

para el próximo año 2010, esto es, el esqueleto de la política gubernamental desprovisto de toda ideología embellecedora.

En efecto, el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión de 21 y 22 de diciembre, otorgó su aprobación definitiva al Proyecto de Ley 5/2009, convertido en la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 —publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 227, de 27 de diciembre, y, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor, en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 310, de 29 de diciembre—.

La Ley 8/2010, cuyo articulado responde a la misma estructura que la Ley de Presupuestos para 2010 —comprendiendo ambas el mismo número de preceptos—, está conformada por un Preámbulo y un texto articulado en sesenta y cuatro artículos, divididos en seis títulos: Título I, “*De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones*”, artículos 1 a 18; Título II, “*De los gastos de personal*”, artículos 19 a 36; Título III, “*De las operaciones financieras*”, artículos 37 a 43; Título IV, “*Procedimientos de gestión presupuestaria*”, artículos 44 a 59; Título V, “*Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid*”, artículos 60 a 63; y Título VI, “*De las tasas*”, artículo 64. Complementan el texto articulado once disposiciones adicionales —dos más que el año anterior— y tres finales —una más que en Ley precedente—, en mérito de la Tercera de las cuales se determinó la entrada en vigor de la Ley el día 1 de enero de 2011. Se incorporan al final de la Ley un total de cinco anexos: Anexo I, “*Créditos Vinculantes con el nivel que se detalla*”; Anexo II, “*Adscripción de Programas por Secciones*”; Anexo III, “*Plan de Actuaciones en Vallecas*”; Anexo IV, “*Subconceptos de Gastos Asociados a Ingresos*”; y Anexo V, “*Módulos Económicos para la Financiación de Centros Docentes Privados Sostenidos con Fondos Públicos*”.

Presupuesta su estructura y la coyuntura de crisis económica en que se elabora, que ha impulsado a la Administración Regional a intensificar la austeridad y el rigor, el contenido sustantivo de la Ley 8/2010 tiene como objetivo el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, a imagen de sus predecesoras, sobre la base de una política asentada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas, decantándose por una política fiscal neutra, articulada sobre el equilibrio presupuestario.

Conforme declara el propio Preámbulo de la Ley, con estos Presupuestos, la Comunidad profundiza en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En el período 2007-2009, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso, la Comunidad ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 0,70% del PIB, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin agotarlo, en un ejercicio que refuerza la austeridad

y la estabilidad. En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, los Presupuestos pueden definirse como los más austeros de la historia de la Comunidad de Madrid y restrictivos, que disminuyen mientras se espera un crecimiento positivo para la economía madrileña en 2011. De hecho, esta mayor austeridad de los Presupuestos no es coyuntural, pues parten de una austeridad intensa en 2010 y de una austeridad permanente a lo largo de los últimos años.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

La parte principal del contenido esencial de la Ley la conforma su Título I, *“De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones”* —rúbrica que repite la de los ejercicios anteriores, que había sustituido a la anteriormente seguida: *“De los créditos presupuestarios”* —, artículos 1 a 18, en la medida en que su Capítulo I, *“De los créditos y su financiación”*, artículos 1 a 6, incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. De igual modo, en este Capítulo se recogen los importes de los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad. El Capítulo II, *“Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados”*, artículos 7 a 18, contiene reglas, primero, sobre el carácter limitativo y vinculante de los créditos, estableciéndose, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica, y, segundo, sobre su régimen de modificación, estableciendo limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. De igual forma, se regulan determinadas excepciones a las

limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

La disciplina "*De los gastos de personal*" la establece el Título II, artículos 19 a 35, cuyas prescripciones se adecuan a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En su Capítulo I, "*De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid*", artículos 19 a 30, regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad, distinguiendo según la relación sea laboral, funcional o estatutaria, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido, y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2011 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones establecida en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público. Asimismo, se regula la oferta de empleo público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas en los Presupuestos, cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2011, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general se fija la tasa de reposición en el 10%. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda. Su Capítulo II, "*Otras disposiciones en materia de personal*", artículos 31 a 36, concreta los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias y los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

En el Título III, "*De las operaciones financieras*", artículos 37 a 43, su Capítulo I, "*Operaciones de crédito*", artículos 37 a 41, recoge los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás Entes Públicos que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2.223/96 del Consejo, de 25 de junio, rela-

tivo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC95); endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el Capítulo II, “*Tesorería*”, artículos 42 y 43, establece una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería, medidas que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

En cinco capítulos se divide el Título IV, “*Procedimientos de gestión presupuestaria*”, artículos 44 a 59. El Capítulo I, “*Autorización de gastos*”, artículo 44, establece la cuantía de los gastos reservados al Gobierno de la Comunidad para su autorización. En el II, “*De los centros docentes no universitarios*”, artículos 45 a 48, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, atribuyéndose al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2011. El régimen presupuestario de las Universidades Públicas y la liquidación de las transferencias a sus Presupuestos se recogen en el Capítulo III, “*Universidades Públicas*”, artículos 49 y 50. Por su parte, el Capítulo IV, “*Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud*”, artículos 51 a 54, regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud. Por último, el Capítulo V, “*Otras normas de gestión presupuestaria*”, artículos 55 a 59, establece otras normas de gestión presupuestaria, como la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, las especialidades en el ejercicio de la función interventora o en el pago de determinadas subvenciones, así como la fijación de las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2011.

Las “*Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid*” se establecen en el Título V, artículos 60 a 63, sin división interna en capítulos — como en los dos ejercicios precedentes y a diferencia de la regla observada en los años anteriores—. Su contenido configura las reglas para la reordenación del mismo, autorizándose la formalización de convenios de colaboración en materia de infraestructuras.

Por último, la actualización de la tarifa de las tasas de cuantía fija vigentes en la Comunidad de Madrid es el objeto del Título VI, “*De las tasas*”, artículo 64.

Por su parte, las disposiciones adicionales complementan el marco jurídico presupuestario, recogiendo preceptos de índole muy diversa. Nos limitamos a destacar que se mantiene el informe preceptivo por la, actual, Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la Ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasifica-

dos en el sector administraciones públicas, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios, y las subvenciones a las Universidades. Asimismo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles y se mantiene de la vigencia de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.

Por lo demás, en las disposiciones finales se modifica la regulación de los gastos plurianuales, se autoriza el desarrollo normativo de la Ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

2.3. Las medidas fiscales y administrativas de acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad

Presupuesta la disciplina presupuestaria, su aprobación, como viene siendo costumbre consolidada, estuvo acompañada, a iniciativa gubernamental — proyecto de Ley 6/2009—, de la paralela tramitación y aprobación de otra disposición legal de contenido económico-financiero, tendente a establecer un conjunto de medidas normativas dispersas, fundamentalmente de carácter tributario, cuyo único punto de conexión radica en estar ligadas a los objetivos fijados en la Ley anual de Presupuestos.

En el año 2010 las mismas se han concretado en la aprobación por el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión ordinaria de 21 y 22 de diciembre — es decir, frente al año 2008, recuperando la costumbre uniforme de ser considerada en la misma sesión plenaria que la Ley a la que acompaña—, de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. La Ley fue publicada, primero, en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 227, de 27 de diciembre, y, posteriormente, a efectos de su publicidad formal y consecuente entrada en vigor, en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 310, de 29 de diciembre.

El contenido de la Ley 9/2009 es el típico de las denominadas “leyes de acompañamiento”, comprendiendo un conjunto de medidas normativas vinculadas a los objetivos establecidos para 2011 en la Ley de Presupuestos Generales y a la política económica a desarrollar en el próximo ejercicio presupuestario. Como en otras ocasiones, el contenido de la Ley lo constituyen medidas de naturaleza tributaria, aunque también se incorporan otras de diferente carácter, que afectan al régimen contractual y de la hacienda de la Comunidad de Madrid, a su estructura organizativa y a la actividad administrativa que esta

desarrolla. Además, este año la situación de crisis económica ha determinado la incorporación de un conjunto adicional de medidas destinadas a racionalizar el sector público y reducir el gasto público, lo que ha comportado una estructura del cuerpo legal por completo distinta de la de sus predecesoras.

La Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2011, tras un detallado Preámbulo —agrupado este año en tres apartados, frente a los siete de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2009 y en la línea de los tres de la correspondiente al año 2008 y de los cuatro de la Ley para 2010—, tiene una estructura más sencilla, conformándose por tres títulos —tres menos que la de 2009 y uno menos que la de 2010 y, a diferencia de aquéllas, conformando títulos y no capítulos—; títulos que coinciden con los grupos de medidas que contiene la Ley: medidas tributarias, medidas administrativas y medidas de racionalización del sector público.

En concreto, el articulado está conformado este año del siguiente modo: Título I, “*Medidas Fiscales*”, artículos 1 y 2; Título II, “*Medidas Administrativas*”, artículos 3 a 15; y Título III, “*Recursos humanos*”, artículos 16 a 29.

Complementan el texto articulado este año un nutrido grupo de disposiciones finales. En concreto, ocho disposiciones adicionales, ocho transitorias, una Disposición Derogatoria Única —que procede a la derogación expresa de un importante bloque de disposiciones legales: Ley 12/1984, de 13 de junio, de Creación del Instituto Madrileño de Desarrollo; Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid; Ley 11/2000, de 16 de octubre, del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid; artículo 13 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 3/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia Financiera de Madrid; Ley 9/1986, de 20 de noviembre, creadora del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña; artículo 3 de la Ley 15/1996, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; las normas de creación de los órganos colegiados que se relacionan en el Anexo de La Ley y las referencias que se hagan a los mismos en esa u otras normas; Decreto 55/2006, de 22 de junio, por el que se crea el Instituto Regional de las Cualificaciones; artículos 36 a 39 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de Comunidad de Madrid; y artículos 1 a 5, así como su Disposición Transitoria Tercera, de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas— y cuatro disposiciones finales, la última de las cuales dispone la entrada en vigor de la Ley el día 1 de enero de 2011.

El notable impacto sustantivo de la disposición legal considerada en el ordenamiento autonómico y su especial trascendencia práctica y proyección mediática compelen a considerar, de forma sumaria, su contenido, a cuyo efecto han de diferenciarse tres grandes bloques temáticos, los dos tradicionales de este tipo de norma y expresados en su propia rúbrica y las medidas de racionalización que se incorporan para este ejercicio.

De un lado, las medidas de orden fiscal y tributario, que, en principio, constituyen el núcleo esencial de este tipo de leyes y se recogen en el Título I,

“*Medidas Fiscales*”, y que este año se circunscriben a sus artículos 1 y 2. En su virtud se modifica parcialmente el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se amplía el contenido de la deducción por gastos educativos y se prorrogan, con carácter indefinido, las deducciones para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años y por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil. Conviene recordar, además, que se mantiene en la Comunidad de Madrid, desde el año 2009, la deducción por vivienda habitual en el tramo autonómico, suprimida por la Administración General del Estado. Se rebaja el gravamen de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar correspondiente a los juegos del bingo, bingo interconectado y bingo simultáneo, y se incrementa el porcentaje destinado a premios. También se incluyen modificaciones de carácter técnico en el Texto Refundido, correspondientes a disposiciones vigentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adapta la Disposición Transitoria Primera a una norma con vigencia indefinida, como es el Texto Refundido. En relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se elimina el gravamen sobre el queroseno de calefacción, suprimido por la regulación estatal del impuesto. En relación a las tasas y en el ámbito del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, se introducen modificaciones parciales en cuatro tasas ya existentes: la tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego; la tasa por solicitud de concesión y utilización de la etiqueta ecológica; la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad y la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos. Asimismo, se establecen dos nuevas tasas: la tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que se crea en esta Ley; y la tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid, cuyo establecimiento implica una modificación parcial de la vigente tasa que integra las actuaciones de inscripción registral en supuestos no tipificados expresamente en el Texto Refundido. Asimismo, se establece una moratoria de cinco años en el pago de tasas a las personas físicas que ejerzan actividades económicas y a las empresas de reducida dimensión por razón de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas vinculadas al inicio de sus actividades profesionales o empresariales.

De otro, las medidas de orden administrativo incluidas en el Título II, caracterizadas por su heterogeneidad. En su Capítulo I, artículos 3 a 5, se incluyen las modificaciones que afectan al régimen de la hacienda y la contratación. En primer lugar, a los efectos de dar cumplimiento a la modificación legislativa operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, se crea el Tribunal Administrativo

de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, con el que la Comunidad se dota de un órgano independiente para el conocimiento y resolución de los recursos, reclamaciones, solicitudes de medidas provisionales y cuestiones de nulidad en materia de contratación. También se modifica parcialmente el artículo 54 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a los efectos de adaptar el funcionamiento de la Junta Superior de Hacienda, en cuanto órgano competente en la Comunidad de Madrid para la revisión en vía económico-administrativa, a las previsiones contenidas en la Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Por último, se autoriza a la Comunidad Autónoma a reafianzar los riesgos de crédito asumidos por sociedades de garantía recíproca de carácter general y domicilio social en la Comunidad, derivados de las garantías otorgadas por éstas a sus socios partícipes. En el Capítulo II, artículos 6 a 8, bajo la rúbrica Organización administrativa y en aplicación de una política orientada a alcanzar formas más efectivas y eficientes de gestión del conjunto de recursos humanos, se crea un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Se modifica la Ley de creación de la Agencia Madrileña para la Emigración, ampliando de dos a cuatro años el plazo de vigencia del Plan de Ayuda para la Emigración. Se amplían las competencias de la Agencia de Informática y Comunicaciones, cuyo ámbito de actuación se extiende a las redes y servicios de telecomunicaciones vinculados a la plataforma del servicio 112. En el Capítulo III se contienen las medidas de reforma de la normativa regional relativas a la actividad administrativa. En él se inserta, en primer lugar, la modificación del régimen competencial sancionador por la comisión de faltas muy graves en materia de prevención de incendios, a fin de que los expedientes sancionadores sean sustanciados por los propios Municipios. Se modifica el régimen sancionador de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, al objeto de atribuir las competencias a la Administración Local. Se modifica la Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Carretera. Se reforma la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, en orden a agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos para variar la clase y categoría del suelo, como ya sucede en la mayoría de las Comunidades Autónomas, y a posibilitar económicamente su desarrollo mediante la ejecución simultánea por fases de las obras de urbanización y edificación. Igualmente, se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de dichos suelos, flexibilizando el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos y limitando el carácter demanial de los bienes sobre los que se asientan a los supuestos expresamente previstos en la Ley. Por otra parte, se potencia la ejecución de las obras de rehabilitación. Finalmente, se modifican la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos; la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos

y la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, con la finalidad de regular la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores o guardadores legales de los menores de edad que sean mayores de catorce años y que sean sancionados por vertidos de residuos, consumo de bebidas alcohólicas, realización de grafitis, emisión de ruidos durante la práctica del botellón en horario nocturno u otros comportamientos de los usuarios de las vías y espacios públicos que perturben la convivencia ciudadana. Por último, se determina la competencia de las Corporaciones Locales para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fuera de los supuestos permitidos por la Ley o la ordenanza municipal.

El Título III, artículos 16 a 29, concreta un Plan de racionalización del sector público madrileño. En su Capítulo I, artículos 16 y 17, se incluyen disposiciones relativas a los derechos sindicales y al régimen de empleo temporal. El Capítulo II, artículos 18 a 20, se procede a la modificación y simplificación de estructuras del sector público, tanto administrativo como empresarial, adecuándolo a la realidad económica, lo que comporta la extinción de determinados organismos públicos, la supresión de ciertos órganos administrativos y, en las disposiciones adicionales, la reordenación de sociedades mercantiles, procediendo a su disolución o enajenando la participación de la Comunidad. Así, se declara la extinción de los siguientes entes públicos y Entidades de Derecho público: Instituto Madrileño de Desarrollo, Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud, Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, así como los organismos autónomos de carácter administrativo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Instituto Madrileño de Administración Pública y Agencia Financiera de Madrid. En segundo lugar, se suprimen otros órganos colegiados de carácter consultivo que se relacionan en el Anexo de la Ley y el Defensor del Paciente y el Instituto Regional de las Cualificaciones.

2.4. Otras disposiciones legales aprobadas por la Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid, conforme se ha anticipado, ha aprobado durante el año 2010 otras siete normas legales: cuatro en el primer periodo de sesiones del año —febrero-junio—, una en sesión extraordinaria celebrada durante el mes de julio y las dos restantes en el segundo periodo de sesiones —septiembre-diciembre—.

2.4.1. Creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión celebrada el día 18 de febrero, asumiendo la Proposición de Ley 1/09, formalizada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobó la Ley 1/2010, de 24 de febrero.

El objeto de sus cinco artículos es crear un Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de cuantas funciones le sean propias dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

En el mismo pueden integrarse, siendo voluntaria la colegiación, quienes posean el título académico oficial de Diplomado en Educación Social, establecido en el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, los que posean un título extranjero debidamente homologado, así como aquellos que se encuentren en las disposiciones transitorias de la propia Ley.

Complementan el texto articulado cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones adicionales, la segunda de las cuales determinó la entrada en vigor de la Ley el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, que tuvo lugar el 25 de febrero.

2.4.2. *La Autoridad del Profesor*

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión de 10 de junio, procedió a la aprobación de la iniciativa legislativa con mayor proyección política y mediática del año: la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, cuyo origen lo fue el Proyecto de Ley 1/2010.

La Ley se estructura en dos títulos.

El Título I, artículos 1 a 4, establece las “*Disposiciones generales*”, delimitando el objeto, ámbito de aplicación y principios generales, además de definir la Función docente.

En el Título II, artículos 5 a 12, se concreta la “*Protección jurídica del Profesor y régimen disciplinario en los centros educativos*”. En primer lugar, su Capítulo I establece el régimen de “*Protección jurídica del Profesor*” en los artículos 5 a 8. El Capítulo II afirma el “*Régimen disciplinario en los centros educativos*”, a lo que dedica sus artículos 9 a 12.

Complementan el texto articulado una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final.

El articulado de la nueva Ley tiene como objetivo reforzar la autoridad de maestros y profesores, con el fin de garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la enseñanza. La Ley reconoce la condición de autoridad pública para los directores y demás miembros del equipo directivo, así como para el resto de profesores de los centros educativos públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid. La condición de autoridad pública implica que los hechos constatados por los profesionales de la enseñanza gozarán de presunción de veracidad en sus declaraciones e informes. Con ello se pretende fomentar la consideración y el reconocimiento público que les corresponde a los docentes, de acuerdo con su importante labor, y facilitar que puedan ejercer sus funciones en un clima de orden, disciplina y respeto. La Ley también permitirá que las faltas que se cometan contra los maestros tengan una consideración más grave, siendo sancionables no sólo

las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar sino también aquellas que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar. También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa.

2.4.3. *Las instalaciones aeronáuticas de la Comunidad*

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión de fecha 17 de junio, procedió al establecimiento de la regulación de las instalaciones aeronáuticas de la Comunidad, aprobando la que sería promulgada como Ley 3/2010, de 22 de junio.

Ley se estructura en tres títulos, una disposición transitoria y tres finales.

El Título Preliminar, artículos 1 a 6, contiene las “*Disposiciones generales*” de la Ley.

El Título I, artículos 7 a 12, regula el “*Régimen de las instalaciones aeronáuticas competencia de la Comunidad de Madrid*”, dividido en cuatro Capítulos: Capítulo I, “*Establecimiento y modificación de aeropuertos y aeródromos competencia de la Comunidad de Madrid*”, artículos 7 a 9; Capítulo II, “*De los helipuertos competencia de la Comunidad de Madrid*”, artículo 10; Capítulo III, “*Competencias de la Comunidad de Madrid para la ejecución de la legislación estatal en materia de aeropuertos*”; artículo 11; y Capítulo IV, “*Planes directores*”, artículo 12.

El Título II se ocupa del “*Régimen sancionador en materia de uso y funcionamiento de instalaciones aeronáuticas*”, artículos 13 a 21.

Complementan el texto articulado una Transitoria Única y tres disposiciones finales.

2.4.4. *Medidas Urgentes para la reducción del déficit público*

El Pleno de la Asamblea de Madrid, reunido en sesión de fecha 28 de junio, aprobó la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

La Ley es fruto de la necesidad de España de cumplir con los compromisos asumidos ante la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas durante la actual coyuntura económica, que exige una serie de medidas urgentes para la reducción del déficit en las Administraciones Públicas.

A tal efecto, en el ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Estado, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 del texto constitucional, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la

reducción del déficit público, convalidado por el Congreso de los Diputados el siguiente 27 de mayo. El Real Decreto-ley comprende una serie de disposiciones en materia retributiva que tiene por finalidad reducir en un cinco %, en términos anuales, la masa salarial del sector público.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la Comunidad de Madrid resultó obligada a adoptar, con carácter inmediato, las actuaciones pertinentes para la adecuación de su legislación a esa norma y, por ende, a modificar el artículo 19.1 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, que regula las retribuciones de los empleados públicos. Además, aun no estando impuesta por la normativa básica estatal, la minoración de retribuciones se hace extensiva a los Altos Cargos, así como a los miembros del Consejo Consultivo y del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. Además, como medida adicional de contención del gasto público, se minoran las retribuciones del personal no directivo de las sociedades mercantiles del sector público madrileño, que experimentarán la misma reducción y en los mismos términos que resulten de aplicación al personal laboral. Por último, se reduce el importe de los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, establecido en el Anexo V de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

La Ley está conformada por dos artículos. El artículo 1 establece la *“Modificación de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010”* y el artículo 2 la *“Modificación del módulo económico para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos”*.

Complementan el texto articulado ocho disposiciones adicionales, una derogatoria y tres disposiciones finales.

2.4.5. *Medidas Fiscales para el fomento de la actividad económica*

El Pleno de la Asamblea de Madrid, reunido en sesión extraordinaria al efecto, aprobó el día 8 de julio la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica.

La Ley está conformada por dos artículos. El artículo 1 establece la *“Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años”* y el artículo 2 la *“Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil”*.

Complementan el texto articulado una Disposición Adicional y cuatro disposiciones finales.

En orden a fomentar el establecimiento y creación de empresas y, en definitiva, el crecimiento económico, se adoptan diversas medidas fiscales.

Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen tres medidas. En primer lugar, se establece una nueva deducción autonómica para

jóvenes emprendedores, empresarios o profesionales menores de treinta y cinco años que inician su actividad durante el año 2010. Se crea otra nueva deducción por la adquisición de acciones correspondientes a procesos de ampliación de capital o de oferta pública de valores, en ambos casos a través del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil. Por otro lado, para favorecer a las familias numerosas, se incrementan las cuantías del mínimo por descendiente correspondientes al tercero y siguientes hijos en un 10%, el máximo permitido por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Asimismo, se atribuye a la Consejería competente en materia de consumo el ejercicio de la potestad sancionadora establecida en el artículo 15 de la Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el Acceso de las Personas Ciegas o con Deficiencia Visual Usuarías de Perro Guía al Entorno.

Finalmente, se modifica la Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, para ampliar la duración mínima de las autorizaciones municipales de cinco a quince años, con el fin de permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos como régimen general, y se configura un régimen transitorio específico para la actividad de venta ambulante, con tres disposiciones transitorias.

2.4.6. *Creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid*

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión celebrada el día 14 de octubre, asumiendo la Proposición de Ley 3/09, formalizada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobó la Ley 6/2010, de 25 de octubre.

El objeto de sus cinco artículos es crear un Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de cuantas funciones le sean propias dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

En el mismo pueden integrarse, siendo voluntaria la colegiación, los profesionales que posean la titulación universitaria oficial de Ingeniero en Informática, o la de Licenciado en Informática, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1459/1990, de 26 de octubre, y el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, o posean un título debidamente homologado por la autoridad competente.

Complementan el texto articulado tres disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales y una disposición final, en cuya virtud la Ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, que tuvo lugar el 29 de junio.

2.4.7. Creación del Colegio Profesional de Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión celebrada el día 14 de octubre, asumiendo la Proposición de Ley 4/09, formalizada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobó la Ley 7/2010, de 25 de octubre.

El objeto de sus cinco artículos es crear un Colegio Profesional de Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de cuantas funciones le sean propias dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

En el mismo pueden integrarse, siendo voluntaria la colegiación, los profesionales que posean la titulación universitaria oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión o Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, o la de Diplomado en Informática, según lo establecido en los Reales Decretos 1460/1990, y 1461/1990, de 26 de octubre, y el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, o posean un título debidamente homologado por la autoridad competente.

Complementan el texto articulado tres disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales y una disposición final, en cuya virtud la Ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, que tuvo lugar el 29 de junio.

III. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA POR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3.1. Líneas generales de su ejercicio por el Gobierno de la Comunidad

De forma semejante a lo sucedido con la producción legislativa, el Ejecutivo regional ha mantenido en el año 2010 la tendencia a la reducción en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuyen los vigentes artículos 22.1 y 40.2 del Estatuto de Autonomía, desarrollados por los artículos 9.a) y 28 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el número de Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno que durante el año han accedido al *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* es, tan sólo, de noventa y tres —uno de ellos dictado en 2009, concretamente el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid; insertado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 14 de enero de 2010—. Se trata de la cifra anual más baja desde la constitución de la Comunidad de Madrid. Debe precisarse, habida cuenta que el último Decreto publicado es el 98/2010, que no se han

insertado en el diario oficial ni el número 6/2010, ni los números 90, 91, 92, 93 y 94/2010.

A los mismos han de sumarse los puntuales Decretos dictados por la Presidencia de la Comunidad, conforme a la competencia que le reconoce el artículo 19.3 de la citada Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. El número de los mismos durante el presente año ha sido también muy pequeño; de hecho, en el diario oficial tan sólo se han editado ocho expresiones del ejercicio de su potestad normativa por parte de la Presidenta; es más, uno de ellos fue dictado en el año 2009 —en concreto, el Decreto 12/2009, de 29 de diciembre, por el que se concede una Encomienda de Número de la Orden de Dos de Mayo; editado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 19 de enero de 2010—. El contenido de dicha producción, al margen del cese, a petición propia, de don Juan José Güemes Barrio como Consejero de Sanidad —Decreto 3/2010, de 18 de marzo, insertado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* del propio día— y del nombramiento tanto de Consejero de Sanidad —Decreto 4/2010, de 18 de marzo, editado en el mismo *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* que el anterior—, como de Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración —Decreto 5/2010, de 18 de marzo, publicado en el propio *Boletín*—, se ha constreñido al cese, por expiración de su mandato, y paralelo nombramiento del Director de la Agencia de Protección de Datos —respectivamente, Decreto 1/2010, de 28 de enero, insertado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 1 de febrero, y Decreto 2/2010, de 4 de febrero, incorporado al *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 5 de febrero—, a la concesión de una Encomienda de Número de la Orden del Dos de Mayo, operada mediante el Decreto 6/2010, de 22 de abril —insertado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 29 de abril—, y al nombramiento de miembros del Consejo de Protección de Datos, efectuado por medio del Decreto 7/2010, de 2 de junio —publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 11 de junio—.

Constatado el dato numérico, es oportuno realizar dos precisiones.

En primer lugar, que la minoración del volumen cuantitativo de la producción reglamentaria constituye una constante en la dinámica de la Administración autonómica encabezada por Esperanza Aguirre. En efecto, no es ocioso recordar que en el año 2004 el Consejo de Gobierno aprobó ciento cincuenta y seis Decretos, en 2005 la cifra se redujo a ciento treinta y tres, registrándose ciento doce en 2005, ciento diecinueve en 2006, ciento cincuenta y ocho en 2007, ciento sesenta y cuatro en 2008 y ciento seis en 2009. Frente a estos datos, sirva recordar que en el año 2002 el número de Decretos acordados por el Presidente de la Comunidad y su Consejo de Gobierno rebasó la cifra de cuatrocientos.

Segundo, que la gran mayoría de los Decretos referidos carece de contenido normativo sustantivo en sentido estricto, tratándose de disposiciones meramente organizativas y domésticas, especialmente relativas al nombramiento y cese de distintos cargos y miembros de la Administración autonómica y de or-

ganismos dependientes de la Comunidad. No es ocioso recalcar que del total de Decretos dictados por el Consejo de Gobierno, treinta y cinco tienen dicha finalidad exclusiva en el presente año 2010 —3, 4, 7, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 67 (por el que, lo que se constata dada su proyección en los medios de comunicación social, se cesó a don Jesús Neira Rodríguez como Presidente del Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género), 76, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 97 y 98—, esto es, más de una tercera parte. Los restantes setenta y cuatro Decretos, por su parte, al margen de la concesión de condecoraciones —en tres ocasiones la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, Decretos 23, 40 y 75/2010— y de las modificaciones operadas en la estructura orgánica de sus Consejerías —objetivo del Decreto 15/2010, por el que se fusionan la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación, y del Decreto 77/2010, por el que se modifica la estructura orgánica de la Consejería de Educación, así como del Decreto 32/2010 (fusión de Direcciones Generales de la Consejería de Economía y Hacienda)—, se ocupan principalmente de la creación, disciplina, modificación o extinción de otros organismos integrantes de la Administración autonómica y de su sector público —20 (Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación), 52 (estructuras básicas de Atención Primaria del Área Única de Salud), 69 (Servicio Madrileño de Salud), 71 (Turmadrid) y 95 (Estatutos de las Empresas Públicas de los nuevos Hospitales)— o del establecimiento de una cuota suplementaria de tarifa de distribución de agua en determinados municipios —hasta en cinco ocasiones: Decretos 26 (Griñón), 64 (San Martín de la Vega), 65 (Miraflores de la Sierra), 72 (Batres) y 86 (Titulcia)—.

Tercero, que en el año analizado ha de hacerse referencia a tres normas singulares:

- Decreto 22/2010, de 22 de abril, por el que se modifica el Decreto 17/1987, de 9 de abril, por el que se regulan las condiciones materiales y aquellos otros aspectos necesarios para la celebración de elecciones a la Asamblea de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 4 de mayo; corrección de errores en el posterior ejemplar de 7 de mayo). En su virtud, en particular, queda derogado el Anexo denominado “Urna electoral” de la Orden 650/1995, de 5 de abril, por la que se aprueban los Anexos del citado Decreto 17/1987.
- Decreto 30/2010, de 2 de junio, por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para el día 8 de junio de 2010 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 4 de junio).
- Decreto 68/2010, de 23 de septiembre, por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para el día 29 de septiembre de 2010 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 27 de septiembre).

Presupuesto lo anterior, cabe destacar lo que sigue.

3.2. Reglamentos de carácter general en desarrollo de prescripciones legales

A diferencia del año 2006 y a semejanza de los años 2007, 2008 y 2009, en desarrollo de las determinaciones legalmente establecidas, configurando un reglamento de carácter general o procediendo a su modificación, se han dictado un número muy escaso de disposiciones generales.

De las mismas ha de destacarse el Reglamento de Protección de los Consumidores, aprobado mediante Decreto 1/2010, de 14 de enero (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 21 de enero). El Decreto de aprobación se estructura en un artículo único, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Por su parte, el Reglamento que se aprueba mediante el Decreto, se estructura en cinco títulos, con el siguiente contenido:

- El Título I del Reglamento, artículos 1 y 2, regula su objeto y ámbito de aplicación.
- El Título II, artículos 3 a 27, relativo a órganos colegiados de consulta y asesoramiento, establece la regulación del Consejo de Consumo, así como su adscripción, composición y funciones, con el objeto de adaptarlo a la situación actual.
- El Título III, artículos 28 a 46, regula la protección jurídica, administrativa y técnica, en relación con los derechos de los consumidores, estableciendo una regulación en función de las necesidades detectadas con la aplicación práctica del sistema unificado de reclamaciones y los códigos de buenas prácticas y símbolos de calidad empresarial. Las dificultades surgidas para la universalización de la hoja de reclamaciones prevista en el sistema unificado de reclamaciones y para la fijación de criterios uniformes entre los órganos competentes en esta materia motivan dicha regulación. Por otra parte, se vincula en su totalidad el desarrollo de los códigos de buenas prácticas al Consejo de Consumo, al considerarlo el foro adecuado para su incardinación.
- En el Título IV, artículos 47 a 73, se regula el control, inspección y sanción en materia de consumo.
- En el Título V, artículos 74 a 78, relativo a la cooperación administrativa, se procede a adaptar la regulación de la Comisión Regional de Política de Consumo a las necesidades detectadas durante los años que han mediado entre la aprobación del anterior Reglamento y el presente. Asimismo, se establece el marco jurídico de aplicación al Registro de servicios de consumo para adaptarlo a las nuevas figuras que surgen en este ámbito. Debe tenerse en cuenta que su artículo 78 ha sido derogado por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, que suprime la Comisión Regional de Política de Consumo establecida en aquel precepto.

Relevante es, asimismo, el Decreto 2/2010, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la edición electrónica del “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 1 de febrero). El mismo procede a un nuevo diseño del diario oficial, en orden a su configuración como un servicio público universal y de consulta gratuita, libremente accesible a través de Internet a todos los ciudadanos, a cuyo efecto se crea la edición electrónica y se le confiere plena autenticidad y validez jurídica. El texto articulado está dividido en tres Capítulos:

- El Capítulo I, artículos 1 a 5, establece las “Disposiciones generales”, delimitando el objeto y características de la edición electrónica, a la que se otorga carácter oficial y auténtico.
- El Capítulo II, artículos 6 a 9, regula el “Acceso de los ciudadanos al *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*”.
- El Capítulo III, artículo 10, se ocupa de la “Publicación de documentos” en el Boletín, regulando las solicitudes de publicación.
- Complementan el texto articulado dos disposiciones adicionales, una transitoria única, una derogatoria única u dos finales.

El Decreto 5/2010, de 25 de febrero, procede a la modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Mesa para la Integración y Promoción del Pueblo Gitano (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 8 de marzo). Su artículo único modifica los apartados 1 a 4 del artículo 3 del previo Decreto 135/2002, de 25 de julio.

3.3. Regulación de sectores de actividad administrativa específicos

En el apartado anterior se ha considerado el único reglamento general dictado durante el presente año, con una nítida influencia sectorial. Al margen de lo ya indicado, ha de dejarse constancia, de forma sistemática y agrupándolas por ámbitos sectoriales, de las siguientes disposiciones.

Específicamente en el sector comercial, el Decreto 87/2010, de 16 de diciembre, por el que se establece el calendario comercial de apertura de establecimientos en domingos y festivos durante el año 2011 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 23 de diciembre). Sus cuatro artículos tienen por objeto autorizar la apertura al público de un total de veintidós domingos y días festivos en la Comunidad de Madrid para el año 2011, aprobando así el calendario específico de apertura comercial en ese año, de acuerdo a la postura apoyada mayoritariamente por las entidades representadas en el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid. Con carácter general, los criterios que permiten identificar los domingos y festivos hábiles a efectos comerciales, se reconducen a aquellos en los que se produce una mayor actividad comercial. Así, estos criterios han sido la pauta marcada por el consenso mayoritario de años precedentes, y entre ellos los siguientes: autori-

zar los domingos o festivos del mes de diciembre y el último domingo del mes de noviembre, atendiendo a la especial demanda del consumidor, en razón de las campañas comerciales de Navidad y Reyes; autorizar la apertura de los primeros domingos de cada mes, de acuerdo con la costumbre ya establecida en la Comunidad de Madrid, a efectos de facilitar la referencia de compras a los consumidores; autorizar la apertura del primer domingo coincidente con el período de promoción de ventas en rebajas de invierno; y, finalmente, la apertura de aquellos domingos y festivos de especial atractivo para el consumidor, los coincidentes con el período de rebajas estival y períodos vacacionales. En relación con las fiestas locales hábiles para el ejercicio de la actividad comercial que hayan sido solicitadas por los respectivos Ayuntamientos, como viene siendo habitual y tal y como determina la normativa vigente, serán incorporadas con posterioridad a la aprobación del presente Decreto, mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El resultado es que podrán abrir los establecimientos comerciales los siguientes 22 domingos y festivos: Enero, 2 y 9; Febrero, 6; Marzo, 6; Abril, 3 y 24; Mayo, 2; Junio, 5; Julio, 3 y 25; Agosto, 7 y 28; Septiembre, 4; Octubre, 2 y 12; Noviembre, 6 y 27; y Diciembre 4, 6, 8, 11 y 18.

En este mismo ámbito no puede omitirse el Decreto 29/2010, de 20 de mayo, por el que se autoriza la participación de la Comunidad de Madrid en la constitución de la Fundación para la Promoción e Innovación de las PYMES madrileñas, PROPYMES (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 15 de junio).

En materia cultural cabe reseñar el Decreto 37/2010, de 8 de julio, por el que se crea la modalidad de Patrimonio Histórico de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 20 de julio). Asimismo, debe considerarse la declaración de la Casa de Campo de Madrid como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, operada por Decreto 39/2010, de 15 de julio (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 17 de noviembre).

En materia medioambiental, además de la proyección del inmediatamente referido Decreto 39/2010, ha de considerarse lo dispuesto por el Decreto 36/2010, de 1 de julio, por el que se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuencas de los ríos Alberche y Cofío” y se aprueba el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado “Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofío” (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 10 de septiembre). Dentro de este mismo apartado cabe hacer referencia al Decreto 70/2010, de 7 de octubre, para la simplificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 11 de octubre; corrección de errores en el posterior ejemplar de 15 de octubre).

En el ámbito sanitario, al margen del cambio en el titular de la Consejería —Decretos de la Presidenta 3 y 4/2010, de 18 de marzo—, se han dictado el

Decreto 51/2010, de 29 de julio, por el que se regula el ejercicio de la libre elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de hospital y médico en Atención Especializada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 9 de agosto), y, como complemento del anterior, el Decreto 52/2010, de la misma fecha, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primera del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 9 de agosto).

Con todo, el bloque normativo más numeroso se ha centrado, un año más, en el ámbito de la educación. Refiriéndonos exclusivamente a su número de orden y fecha, han de recordarse los Decretos tendentes a la creación y reorganización de casas de niños, escuelas infantiles, de colegios públicos de educación primaria, de institutos de educación secundaria y de centros integrados de formación profesional —Decretos 27/2010, de 20 de mayo; 49 y 50/2010, de 29 de julio; 58 y 59/2010, de 26 de agosto; y 85/2010, de 9 de diciembre—, a los que ha de sumarse el Decreto 19/2010, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento administrativo de autorización de centros docentes privados para impartir enseñanzas regladas no universitarias (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 23 de abril). De igual modo, con detalle tan sólo en este caso de su número de orden, los once Decretos relativos al establecimiento de distintos currículos de ciclo formativo —8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 60, 61, 62 y 63/2009—. Por lo demás, por Decreto 16/2010, de 18 de marzo, se formalizó el nombramiento de Fernando Galván Reula como Rector de la Universidad de Alcalá (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 22 de marzo). Al margen del anterior, en el ámbito universitario han de tenerse presentes el Decreto 42/2010, de 15 de julio, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las Universidades Públicas de Madrid para el curso académico 2010-2011 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 20 de julio), el Decreto 43/2010, de 22 de julio, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de Máster en las Universidades Públicas de Madrid para el curso académico 2010-2011 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 29 de julio), el Decreto 28/2010, de 20 de mayo, por el que se modifican los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 10 de junio), el Decreto 73/2010, de 14 de octubre, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Europea de Madrid, derogándose el Decreto 64/2003 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 4 de noviembre), el Decreto 74/2010, de 21 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, derogándose los aprobados por Decreto 215/2003 (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 15 de noviembre) y el Decreto 78/2010, de 28 de octubre, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Camilo José Cela (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 12 de noviembre).

No puede cerrarse esta exposición, por su especial incidencia en el ámbito local, sin hacer referencia al Decreto 79/2010, de 25 de noviembre, por el que se prorroga el plazo hasta el 2011 del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) 2006-2007 PRISMA 2006-2007, previsto en el Decreto 55/2009, de 14 de mayo (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 29 de noviembre; con corrección de errores en el posterior de 2 de diciembre).

3.4. Disposiciones administrativas

En el ámbito administrativo ha de destacarse, en primer lugar, que durante el presente año no ha accedido al diario oficial, como consecuencia de los recortes presupuestarios, el tradicional Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2010.

Por otro lado, ha de destacarse el anual Decreto 66/2010, de 9 de septiembre, en cuya virtud se establecen las fiestas laborales para el año 2011 en la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 21 de septiembre). De acuerdo con el mismo, tendrán dicha consideración las siguientes doce fiestas: 1 de enero (1 de enero (sábado), Año Nuevo; 6 de enero (jueves), Epifanía del Señor; 21 de abril (jueves), Jueves Santo; 22 de abril (viernes), Viernes Santo; 2 de mayo (lunes), fiesta de la Comunidad de Madrid; 23 de junio (jueves), Corpus Christi; 25 de julio (lunes), fiesta de Santiago Apóstol; 15 de agosto (lunes), Asunción de la Virgen; 12 de octubre (miércoles), fiesta nacional de España; 1 de noviembre (martes), Todos los Santos; 6 de diciembre (martes), día de la Constitución española; y 8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepción. Además de las doce fiestas relacionadas se celebrarán en cada municipio dos fiestas locales; reténgase la relación de los días de sus respectivas fiestas locales aprobada por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, mediante Resolución de fecha 30 de noviembre (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 14 de diciembre).

Igual relevancia tiene el específico Decreto 88/2010, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario para el año 2011 de días inhábiles, a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 28 de diciembre). En virtud del mismo son inhábiles en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, además de los domingos, las siguientes fiestas laborales: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 21 de abril, Jueves Santo; 22 de abril, Viernes Santo; 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid; 23 de junio, Fiesta del Corpus Christi; 25 de julio, Santiago Apóstol; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; y 8 de diciembre, La Inmaculada Concepción. Además, serán inhábiles en cada municipio de la Comunidad los días de sus respectivas fiestas locales.

3.5. Regulación de órganos administrativos

En primer lugar, debe dejarse constancia aquí de las distintas reformas operadas en la estructura orgánica interna de algunos de los departamentos que integran el Consejo de Gobierno de la Comunidad, especialmente a raíz del cese, a petición propia, del Consejero de Sanidad a comienzos de año, aceptada por la Presidenta mediante su, ya citado, Decreto 3/2010, de 18 de marzo.

Es, además, necesario recordar el Decreto 15/2010, de 18 de marzo, por el que se fusionan la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 18 de marzo), complementado por el posterior Decreto 20/2010, de 25 de marzo, por el que se reestructuran determinados órganos de la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 26 de marzo).

Mediante el Decreto 32/2010, de 24 de junio, se fusionaron la Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico y la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 25 de junio).

Por medio del Decreto 77/2010 se modifica la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 3 de noviembre).

Last but not least el Decreto 89/2010, de 23 de diciembre, de adecuación de la estructura de la Comunidad de Madrid a las medidas de racionalización del sector público (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 29 de diciembre).

IV. LA DINÁMICA POLÍTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

4.1. La celebración del «Debate sobre el estado de la Región»

El conocido como “Debate sobre el estado de la Región” —establecido por el Título XVI del Reglamento de la Asamblea de Madrid, artículos 218 y 219—, se celebró los días 14 y 15 de septiembre del presente año 2010.

Su desarrollo se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid* número 734, páginas 21.257 a 21.325, publicándose las siete resoluciones aprobadas en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 208, de 23 de septiembre, páginas 19.595 a 19.599.

Aunque carece de interés pormenorizar aquí el desarrollo del debate, con intervenciones de la Presidenta de la Comunidad y de los Portavoces y Portavoces Adjuntos de los tres Grupos Parlamentarios, por su indudable trascendencia, en cuanto determinan la línea de actuación del Ejecutivo regional marcada por la Asamblea de Madrid para el próximo año, procedemos seguidamente a la reproducción de las siete resoluciones adoptadas:

Número 1.- En materia de política económica y sistema de financiación.

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:

- I. A continuar con la política de reducción del gasto público que ha venido llevando en los últimos años, manteniendo el equilibrio presupuestario en los términos contenidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- II. A que apruebe con carácter inmediato, un plan de reestructuración de su sector público sin menoscabo de la calidad de los servicios.
- III. A continuar promoviendo sus políticas liberales y las medidas de apoyo al tejido empresarial de la región. En concreto a:
 1. Continuar impulsando las diversas líneas de apoyo a las PYMES contenidas en el Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería de la Comunidad de Madrid 2008-2011.
 2. Profundizar en la ejecución de las medidas contempladas en el Plan de Fomento Industrial de la Comunidad de Madrid 2009-2012.
 3. Seguir impulsando la dinamización del sector turístico, apoyando la promoción de nuestra Región como destino y priorizando la promoción de productos como el turismo cultural, el ocio familiar, la gastronomía y la captación de grandes eventos culturales y deportivos que potencian la imagen de Madrid.
 4. Continuar promoviendo la Innovación y avanzando en el desarrollo del Plan Regional de I+D+i 2009-2012, que ha permitido a Madrid posicionarse como la región española más innovadora.
 5. Impulsar la colaboración público-privada en el ámbito del sector público para conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos.
 6. Abrir una línea de créditos reembolsables para apoyo a las empresas de la región.
 7. Seguir promoviendo la firma de nuevos Convenios de Colaboración con Entidades Financieras para facilitar a las empresas madrileñas financiación en condiciones preferentes.
 8. Impulsar la promoción exterior de las empresas madrileñas.
- IV. Promover una Ley de Garantía del Suministro de Gas para conseguir seguridad y eficiencia en el suministro de gas a los hogares madrileños.
- V. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que:
 - Promueva una bajada del impuesto de sociedades y una rebaja de las cotizaciones en las cuotas de la Seguridad Social, como medida de apoyo a las empresas y como factor de generación de empleo.
 - Reconozca a los más de 600.000 madrileños que no han sido computados a efectos de la financiación sanitaria en el marco del

- Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas.
- Transfiera a la Comunidad de Madrid los 600 millones de euros que ha eliminado del anticipo del Fondo de Competitividad del Sistema de Financiación Autonómica en el ejercicio 2011.
 - Cese la discriminación a la que ha sometido a la Comunidad de Madrid en los últimos siete años y que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se contemplen las inversiones que Madrid necesita para garantizar su desarrollo y seguir mejorando la calidad de vida de los madrileños.
 - Abone a la Comunidad de Madrid las cuantías derivadas de la aplicación del principio de lealtad institucional durante la vigencia del anterior Sistema de Financiación, así como la compensación por incremento poblacional, por menores inversiones territorializadas, reclamaciones judiciales sobre la Entidad Colaboradora y recurso contencioso sobre anticipos para 2010, cuyo coste se estima en 18.848 millones de euros.

Número 2.- En materia de empleo y políticas sociales.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- Adaptar la formación de los trabajadores madrileños a las necesidades reales de las empresas para favorecer su inserción profesional y la competitividad empresarial.
- Seguir impulsando medidas que mejoren la seguridad y salud en el trabajo y reduzcan la siniestralidad laboral de los trabajadores madrileños, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales, en el marco del III Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, fruto del diálogo social.
- Seguir impulsando el empleo autónomo.
- Dirigirse al Gobierno de la Nación para que complete la reforma laboral, abordando aquellos aspectos que son fundamentales para facilitar la contratación y para frenar la destrucción de empleo, como:
 - a) Las modalidades de contratación.
 - b) La negociación colectiva.
 - c) Y la vinculación de las políticas activas a las necesidades de las empresas.
- Seguir avanzando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente a través de la formación e inserción laboral, favoreciendo el acceso a puestos de responsabilidad.
- Seguir impulsando políticas destinadas a los jóvenes madrileños, en especial, aquellas que van destinadas a fomentar la formación, el empleo y la actividad empresarial, el acceso a la vivienda y la promoción de la cultura y el ocio saludable.
- A reiterar al Gobierno de la Nación que acometa la urgente reforma de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en cumplimiento de la Proposición No de

Ley 13/2010 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid el 8 de abril de 2010.

- Exigir al Gobierno de la Nación que dote a nuestra región de los recursos necesarios para la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia, estableciendo un marco de financiación adecuado, suficiente y sostenible, que se ajuste al coste real de los servicios que se prestan.
- Seguir impulsando la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid.
- Exigir al Gobierno de la Nación la restitución inmediata de los recursos comprometidos para financiar los siguientes planes, programas y proyectos:
 - III Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2009-2010.
 - Proyectos de intervención social integral e inserción del pueblo gitano.
 - Programa de Atención a la Infancia y a la Familia.
 - Plan Estatal de Voluntariado.
- Seguir avanzando en la integración de los inmigrantes en nuestra región mediante el desarrollo del Plan de Integración 2009-2012, con especial atención a la formación para el empleo, de forma que se favorezca su inserción laboral.

Número 3.- En materia de sanidad.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- Completar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la libertad de elección de médico, enfermero, especialista y hospital.
- Solicitar al Ministerio de Sanidad la acreditación de todos los nuevos hospitales públicos como centros docentes.
- Exigir al Gobierno de la Nación que abone los gastos que asume la Comunidad de Madrid derivados de la atención sanitaria a ciudadanos de otras regiones.

Número 4.- En materia de educación.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- Seguir promoviendo un sistema educativo basado en la libertad de elección, la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades. Un sistema que fomente el mérito, el esfuerzo y la excelencia por parte de los alumnos y que garantice el respeto y la autoridad del profesor en las aulas.
- Continuar desarrollando el modelo de enseñanza bilingüe que ha venido implantando en los colegios de la Región en los últimos años.
- Continuar implantando medidas para estimular la mejora del rendimiento académico y, en concreto, establecer una nueva prueba externa en segundo de primaria de lectura, dictado y cuentas.

Número 5.- En materia de infraestructuras.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que:

- Proceda a la remodelación del enlace de la M-40 con la A-6, y a la inmediata ejecución de las plataformas reservadas de autobús en las auto-vías radiales y en la A-42.
- Cambie el criterio de financiación al transporte, y pase a ser por número de viajero en lugar de por número de habitantes.

Número 6.- En materia de vivienda, medio ambiente y agua.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- Seguir impulsando el plan de dinamización del alquiler de viviendas de la Comunidad de Madrid.
- Impulsar una modificación en la Ley del Suelo para agilizar la gestión urbanística, de forma que los ayuntamientos, a través de una modificación puntual ordinaria, puedan tomar las decisiones urbanísticas que sus municipios requieran, sin necesidad de tener que recurrir a revisiones completas de los Planes Generales.
- Exigir al Gobierno de la Nación la declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
- Que se dirija al Gobierno de la Nación para que los Presupuestos Generales del Estado para 2011 doten a la Comunidad de Madrid de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Marco del Agua y en el Plan Nacional de Calidad de Aguas.
- Que se dirija al Gobierno de la Nación para garantice, en el marco del proceso de planificación hidrológica, los recursos necesarios para el abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid y, en particular, el aumento de la regulación de los ríos Jarama y Sorbe y la captación de recursos procedentes del Tajo.

Número 7.- En materia de cultura y deportes.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- Que se dirija al Gobierno de la Nación para que promueva una reducción del IVA aplicado a la producción y difusión de las artes y que ponga en marcha todas aquellas medidas fiscales que incentiven y no penalicen la creación artística.
- Reclamar al Gobierno de la Nación un apoyo decidido a la Candidatura de Alcalá de Henares como Capital Europea de la Cultura en 2016.
- Continuar impulsando la supresión de barreras arquitectónicas y mejorando la seguridad de las instalaciones deportivas de nuestra Región.

4.2. La celebración de un debate monográfico sobre asuntos de interés general

La celebración de debates monográficos sobre asuntos de interés general de la Comunidad de Madrid ha sido una característica específica de su Asamblea Legislativa. En efecto, la profusión con la que se celebraron en otras Legislaturas determinó incluso que el Reglamento de 1997 procediera a su regulación expresa, dedicándole un Título específico, el XV, artículos 216 y 217.

De acuerdo con la tendencia manifestada en la VII Legislatura, la vigente VIII Legislatura se ha apartado de la línea precedente. Durante los años 2007 y 2008 se solicitó por parte de los grupos parlamentarios de la oposición la celebración de varios plenos monográficos, sin que la Junta de Portavoces acordara su fijación. En el año 2009 sí se celebró un debate del género, a iniciativa del Grupo Popular: “Debate monográfico sobre el paro y la situación económica en la Comunidad de Madrid”.

De igual modo, durante el año considerado se celebró, en la sesión plenaria de 23 de febrero, un “Debate monográfico sobre la situación económica en la Comunidad de Madrid”, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

El debate se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid* número 630, páginas 18.215 a 18.258, publicándose las resoluciones aprobadas en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 180, de 4 de marzo, páginas 17.425 a 17.427.

Las siete Resoluciones aprobadas, que se reproducen a continuación por su trascendencia, son las siguientes:

Número 1.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la adopción de las siguientes medidas fiscales:

- a) La puesta en marcha de las actuaciones necesarias para la modificación de los mínimos personales y familiares en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aumentando los mínimos para familias numerosas para el año 2010.
- b) La elaboración de una propuesta de deducción de 1.000 euros en el IRPF para jóvenes menores de 35 años que inicien el desarrollo de una actividad por cuenta propia desde el 23 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2010.
- c) La adopción de las medidas necesarias para crear una deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por inversiones realizadas, desde el 23 de febrero hasta 31 de diciembre de 2010, en empresas que se cotizan en el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil.
- d) La compensación fiscal para determinadas tasas municipales, devengadas desde el 23 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2010, que sean exigibles a las personas físicas que ejerzan actividades económicas y a las empresas de reducida dimensión por razón de prestación de servicios o

realización de actividades administrativas vinculadas al inicio de sus respectivas actividades profesionales o empresariales.

Número 2.-

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a aprobar el Decreto de desarrollo de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Número 3.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a impulsar nuevas medidas en el marco de la Estrategia Financiera Global de apoyo financiero a las empresas madrileñas, especialmente Pyme y autónomos, en concreto a través de las siguientes medidas:

- a) Promover y firmar nuevos Convenios de Colaboración con Entidades Financieras, tanto nacionales como supranacionales, públicas y privadas, para facilitar a las empresas madrileñas financiación en condiciones preferentes por valor de 5.000 millones de euros.
- b) Dotar de los recursos económicos necesarios a Avalmadrid SGR en forma de aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas y para Bonificación de Costes, que permitan garantizar su solvencia e incrementar en, al menos, un 15 por ciento su actividad avalista en apoyo a las Pyme madrileñas durante el 2010.
- c) Fomentar el apoyo vía capital a las empresas madrileñas a través de instrumentos de capital riesgo participados por la Comunidad de Madrid.
- d) Promover la firma de un convenio entre el Instituto de Crédito Oficial y la Comunidad de Madrid en apoyo al sector empresarial de la Región.

Número 4.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a continuar con la dinamización de los sectores económicos de la Región mediante las siguientes iniciativas:

- a) Favorecer la atracción de turistas extranjeros y seguir fomentando la variada oferta turística y cultural, que nos ha hecho tener tan buenos resultados en número de visitantes extranjeros, siendo la Región que más ha crecido por este concepto. Así, con la finalidad de potenciarla aún más, se continuará apoyando la atracción de grandes eventos deportivos, culturales y empresariales a celebrar en la Comunidad de Madrid.
- b) En relación con el sector industrial, elaborar un estudio de viabilidad y, en su caso, desarrollar nuevos Planes Renove de equipos e instalaciones, con objeto de contribuir a la reactivación de la demanda de productos y servicios industriales.

- c) Respecto al sector comercial, desarrollar el Plan de Fomento de Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería para el año 2010 (Plan FICOH).
- d) Impulsar el Plan de Infraestructuras Logísticas de la Región, que incluye el estudio y desarrollo de la Plataforma Logística Multimodal de la Comunidad de Madrid y sus accesos ferroviarios, y la plataforma de Arganda-Perales y Morata y su corredor ferroviario.
- e) Desarrollar el proyecto de Parque Biotecnológico en el Municipio de Tres Cantos.
- f) Impulsar decididamente Madrid Network mediante:
 - La puesta en marcha del Centro de Conocimiento de Imagen Biomédica.
 - Plan de mejora de infraestructuras de Banda Ancha de los Parques Tecnológicos de la Comunidad.
 - Participación de empresas de Madrid Network en grandes proyectos internacionales de infraestructuras y otros sectores para favorecer la internacionalización de la Economía Madrileña.

Número 5.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que reclame al Gobierno de la Nación una política de rebaja de impuestos que favorezca la dinamización de la economía y la creación de empleo. En concreto, que inste al Gobierno de la Nación a anular la importante subida del Impuesto del Valor Añadido previsto para junio de este año, así como la promoción de una bajada del impuesto de sociedades y la rebaja de las cotizaciones en las cuotas de la Seguridad Social apoyando de una forma decidida a las empresas.

Número 6.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad para que reclame al Gobierno de la Nación que, en ejercicio de sus competencias, aborde una agenda nacional de reformas que incluya:

1.- Reforma laboral que contemple las siguientes medidas:

- a) Impulsar la eliminación de la dualidad del mercado de trabajo, encaminando los modelos de contratación hacia un modelo único de contrato indefinido con indemnización progresiva, dotado de mayor flexibilidad y estabilidad.
- b) Modificar la estructura de la negociación colectiva, con el objetivo de favorecer la flexibilidad interna y externa de las empresas, así como la movilidad geográfica y funcional.
- c) Luchar contra el absentismo laboral.
- d) Estudiar la apertura de la intermediación laboral al sector privado.
- e) Rebajar las cotizaciones sociales.
- f) Avanzar en la lucha contra la siniestralidad laboral.

2. Reforma del sistema energético, incorporando todas las fuentes de energía que garanticen unos costes que hagan competitivas a nuestras empresas en un mercado globalizado.
3. Lograr un Pacto de Estado en materia educativa que persiga mejorar la calidad de la enseñanza recuperando los principios del esfuerzo, el mérito, y la autoridad del profesor; aumentar la libertad de elección de las familias; y fortalecer las enseñanzas comunes para lograr la igualdad de oportunidades.

Número 7.-

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad para que reclame al Gobierno de la Nación el abono a la Comunidad de Madrid de las cuantías derivadas de la aplicación del principio de lealtad institucional durante la vigencia del anterior Sistema de Financiación, así como la compensación por incremento poblacional, por menores inversiones territorializadas y sentencias judiciales sobre la Entidad Colaboradora, cuyo coste se estima en 18.831 millones de euros. Y que reclame, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la revisión del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas aprobado por la Ley 22/2009, corrigiendo y subsanando las deficiencias detectadas en el mismo.

4.3. La designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid

La vinculación de los Senadores designados por la Comunidad de Madrid, a través de su Asamblea, al mandato autonómico, determinó que una de las primeras decisiones adoptadas por el Pleno de la Cámara, al inicio de la VIII Legislatura, fuera la designación de los representantes de la Comunidad de Madrid en el Senado.

El Pleno, de este modo, procedió al nombramiento de los seis Senadores que le correspondían en su sesión de 28 de junio de 2007:

- Antonio Germán Beteta Barreda (Grupo Parlamentario Popular).
- Luis Peral Guerra (Grupo Parlamentario Popular).
- Juan Van-Halen Acedo (Grupo Parlamentario Popular).
- José Ignacio Echeverría Echaniz (Grupo Parlamentario Popular).
- Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista).
- Ruth Porta Cantoni (Grupo Parlamentario Socialista).

La posterior modificación del equipo gubernamental —incorporándose al mismo dos Senadores— y el aumento de la población de la Comunidad a la fecha de la celebración de las elecciones generales y consecuente incremento en un Senador, determinaron la designación, en sesión plenaria de 27 de

marzo de 2008, de Matilde Fernández Sanz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, por renuncia —al acceder a la condición de Diputado por la provincia de Madrid en el Congreso de los Diputados— de Rafael Simancas Simancas. En el mismo Pleno, consecuencia del incremento de población de la Comunidad, se nombró Senador a don José Quintana Viar, Diputado autonómico del Grupo Socialista. En el posterior Pleno de 30 de junio, por renuncia de Antonio Germán Beteta Barreda fue elegida Senadora María Gador Ongil Cores. De igual modo, por renuncia de José Ignacio Echeverría Echaniz fue designada María Beatriz Elorriaga Pisarik.

Dichas designaciones se han mantenido sin alteración durante los años 2009 y 2010, por lo que los actuales siete Senadores en representación de la Comunidad de Madrid son los siguientes:

- Luis Peral Guerra (Grupo Parlamentario Popular).
- Juan Van-Halen Acedo (Grupo Parlamentario Popular).
- Ruth Porta Cantoni (Grupo Parlamentario Socialista).
- Matilde Fernández Sanz (Grupo Parlamentario Socialista).
- José Quintana Viar (Grupo Parlamentario Socialista).
- María Gador Ongil Cores (Grupo Parlamentario Popular).
- María Beatriz Elorriaga Pisarik (Grupo Parlamentario Popular).

4.4. La reestructuración del Ejecutivo autonómico

Disecionada así la dinámica de la Comunidad durante 2010, sin perjuicio de los datos de detalle que ya se han recogido —al analizar la “Regulación de órganos administrativos”— y de los que se incorporan en el siguiente epígrafe —relativo a la “Actividad institucional”—, por cuanto respecta al Ejecutivo autonómico ha de destacarse que, a diferencia del año 2008, en el que tuvo lugar una sustancial reestructuración departamental por parte de la Presidenta de la Comunidad, en el presente año 2010, como en el anterior 2009, el Gobierno no se ha visto afectado de forma sustantiva.

Lo afirmado no implica que no se haya producido ninguna modificación en el año objeto del presente Informe, en los términos que ya se han anticipado, pues debe constatar el cese, a petición propia, del Consejero de Sanidad a comienzos de año, aceptada por la Presidenta mediante su, ya citado, Decreto 3/2010, de 18 de marzo.

Es, además, necesario recordar el Decreto 15/2010, de 18 de marzo, por el que se fusionan la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación, complementado por el posterior Decreto 20/2010, de 25 de marzo, por el que se reestructuran determinados órganos de la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación.

V. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

5.1. Composición de la Asamblea de Madrid

De forma esquemática, ha de dejarse constancia de los siguientes datos:

Composición a 1 de enero de 2010, de acuerdo con los resultados de los comicios electorales celebrados el día 27 de mayo de 2007 y a tenor de la reforma del Reglamento parlamentario operada con fecha de 12 de noviembre de 2009, por la que se creó la figura de “Diputados no adscritos”:

Total Diputados: 120.

Grupo Parlamentario Popular (GPP): 64.

Grupo Parlamentario Socialista (GPS): 42.

Grupo Parlamentario Izquierda Unida (GPIU): 11.

Diputados no adscritos: 3.

Composición a 31 de diciembre de 2010. No ha habido modificaciones, por lo que sigue siendo la misma:

Grupo Parlamentario Popular (GPP): 64.

Grupo Parlamentario Socialista (GPS): 42.

Grupo Parlamentario Izquierda Unida (GPIU): 11.

Diputados no adscritos: 3.

Mesa de la Asamblea de Madrid: 7 miembros.

Composición a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con las votaciones registradas en el Pleno de la Cámara durante su sesión constitutiva, de fecha 12 de junio, reproducida en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid* número 1, páginas 3 a 26, no habiéndose modificado con posterioridad:

Presidenta: María Elvira Rodríguez Herrer (GPP).

Vicepresidenta Primera: María Cristina Cifuentes Cuencas (GPP).

Vicepresidente Segundo: Francisco Cabaco López (GPS).

Vicepresidenta Tercera: Antero Ruiz López (GPIU).

Secretaria Primera: Rosa María Posada Chapado (GPP).

Secretaria Segunda: María Helena Almazán Vicario (GPS).

Secretario Tercero: Jacobo Ramón Beltrán Pedreira (GPP).

5.2. Estructura del Gobierno

Han de destacarse, de forma sumaria, los siguientes extremos:

Composición a 1 de enero de 2010. La candidata a Presidenta de la Comunidad propuesta por la Presidenta de la Asamblea de Madrid, de acuerdo

con lo previsto por el artículo 182 del Reglamento de la Asamblea, obtuvo su investidura parlamentaria en la sesión plenaria de la Asamblea celebrada el 19 y 20 de junio de 2007. Inmediatamente, la Presidenta concretó la estructura departamental, mediante el Decreto de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 7/2007, de 20 de junio, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, complementado, en la misma fecha, por los Decretos de la Presidencia de la Comunidad 8/2007 a 22/2007, por los que se establecieron dos Vicepresidencias, concretándose sus funciones, y se nombró a los respectivos titulares de las distintas Consejerías.

La Presidenta resolvió modificar la estructura de su equipo gubernamental en el verano de 2008. La modificación comportó la supresión de una Vicepresidencia y de tres Consejerías, materializándose en el Decreto 77/2008, de 3 de julio, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Sus prescripciones se vieron complementadas por el Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En el año 2009 también se registraron diversas modificaciones, a raíz de la dimisión del Consejero de Deportes —Decreto 1/2009, de 9 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid—, de la creación de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo —Decreto 10/2009, de 12 de febrero, y Decreto 2/2009, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombró Consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid al Excmo. Sr. Don Santiago Fisas Aixelá—, y de la posterior dimisión del titular de la recién creada cartera —Decreto 4/2009, de 29 de abril, de la Presidenta de la Comunidad, por el que se acepta la dimisión del Consejero Sr. Fisas Aixelá—; todo ello determinó la aprobación del Decreto 42/2009, de 30 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modificó la denominación y competencias de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Economía y Hacienda, suprimiendo la efímera Consejería de Cultura, Deporte y Turismo.

Presidencia: Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: Ignacio González González.

Consejerías: 9, lo que comporta cinco menos que las establecidas al inicio de la VIII Legislatura, además de la Portavocía del Gobierno, que tiene rango de Consejería y asume las competencias en materia de cultura y deporte:

Presidencia, Justicia e Interior: Francisco Granados Lerena.

Economía y Hacienda: Antonio Germán Beteta Barreda.

Transportes e Infraestructuras: José Ignacio Echeverría Echániz.

Educación: Lucía Figar de Lacalle.

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: María Isabel Mariño Ortega.

Sanidad: Juan José Güemes Barrios.

Familia y Asuntos Sociales: Engracia Hidalgo Tena.

Empleo y Mujer: Paloma Adrados Gautier.

Inmigración y Cooperación: Javier Fernández–Lasquetty Blanc.

Composición a 31 de diciembre de 2009. Tras la dimisión del Consejero de Sanidad y la fusión de la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación:

Presidencia: Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: Ignacio González González.

Consejerías: 8, lo que comporta seis menos que las establecidas al inicio de la VIII Legislatura, además de la Portavocía del Gobierno, que tiene rango de Consejería y asume las competencias en materia de cultura y deporte.

Presidencia, Justicia e Interior: Francisco Granados Lerena.

Economía y Hacienda: Antonio Germán Beteta Barreda.

Transportes e Infraestructuras: José Ignacio Echeverría Echániz.

Educación: Lucía Figar de Lacalle.

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: María Isabel Mariño Ortega.

Sanidad: Javier Fernández–Lasquetty Blanc.

Familia y Asuntos Sociales: Engracia Hidalgo Tena.

Empleo, Mujer e Inmigración: Paloma Adrados Gautier.

5.3. Tipo de Gobierno

Por apoyo parlamentario: mayoritario —mayoría absoluta—.

Partidos y número de Diputados que le apoyan: Partido Popular; 67 Diputados, hasta la salida del Grupo Popular de los Diputados no adscritos; desde dicho momento el Grupo Popular tiene 64 Diputados, si bien debe dejarse constancia de que los tres no adscritos han votado siempre en sentido coincidente con el Grupo Popular.

Composición del Gobierno: homogéneo; Partido Popular.

5.4. Cambios en el Gobierno

Conforme acaba de indicarse, tras la dimisión del Consejero de Sanidad, el titular de la Consejería de Inmigración y Cooperación pasó a asumir dicha cartera, mientras que la vacante se fusionó con la Consejería de Empleo y Mujer, de tal modo que de las catorce Consejerías establecidas al inicio de la Legislatura en la actualidad el Consejo de Gobierno de la Comunidad está conformado sólo por ocho, además de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

En cuanto a las personas, si en 2008 dejaron de formar parte del Gobierno Aguirre tres *ex* Consejeros: Alfredo Prada Presa, María Beatriz Elorriaga Pisarik y María Gádor Ongil Cores; y en 2009 salieron del Ejecutivo otros dos miembros: Alberto López Viejo y Santiago Fixas Ayselá; en el año 2010 ha dejado de formar parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Juan José Güemes Barrios.

En cuanto a los titulares de las Consejerías ha de destacarse que si en la VII Legislatura tan sólo cuatro Consejeros ostentaban la condición de Diputado, ahora, además de la Presidenta, son ocho los Consejeros que, a su vez, son miembros de la Asamblea de Madrid. En concreto, los siguientes: Ignacio González González, Francisco Granados Lerena, Antonio Germán Beteta Berreda, José Ignacio Echeverría Echániz, Lucía Figar de Lacalle, María Isabel Mariño Ortega, Engracia Hidalgo Tena y Paloma Adrados Gautier. En consecuencia, tan sólo un Consejero no ostenta la condición de Diputado regional: Javier Fernández–Lasquetty Blanc.

5.5. Investidura, moción de censura y cuestión de confianza

No se han formalizado iniciativas del género durante el año 2010.

5.6. Mociones de reprobación

No se ha presentado en el Registro de la Cámara, durante el año 2010, ninguna iniciativa del género.

VI. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Como consideración general, ha de destacarse que la actividad parlamentaria registrada en la Asamblea de Madrid durante el año 2010 ha sido, en términos cuantitativos, muy ligeramente inferior a la correspondiente al precedente 2009.

Desde la anterior premisa, los datos de actividad del quinto y sexto periodos de sesiones de la VIII Legislatura son los siguientes:

6.1. Sesiones celebradas

Debe dejarse constancia:

- Por un lado, del Calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias durante el 7.º Período de Sesiones de la VIII Legislatura (febrero a junio de 2010), establecido por Acuerdo de la Mesa de la Diputa-

ción Permanente de la Asamblea, oída la Junta de Portavoces, de fecha 26 de enero, incorporando Anexo comprensivo de los cuadros mensuales de celebración de sesiones de las Comisiones de la Cámara durante el citado período (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 174, de 28 de enero, páginas 17.038 a 17.043).

- Por otro, del Calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias durante el 8.º Período de Sesiones de la VIII Legislatura (septiembre a diciembre de 2010), establecido por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, oída la Junta de Portavoces, de fecha 14 de septiembre, incorporando Anexo comprensivo de los cuadros mensuales de celebración de sesiones de las Comisiones de la Cámara durante el citado período (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 207, de 16 de septiembre, páginas 19.580 a 19.584).

En virtud de dichos calendarios, los datos resultantes de sesiones celebradas son los siguientes:

De Pleno: 29.

De Comisión: 180.

De Diputación Permanente: 1.

6.2. Comisiones constituidas

Permanentes Legislativas: en los términos establecidos por el artículo 72.2.a) del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid, las Comisiones del género se constituyen de acuerdo con la estructura orgánica departamental del Consejo de Gobierno de la Comunidad, sin perjuicio del establecimiento de 4 órganos funcionales o de trabajo específicos: Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado; Mujer; Juventud; y Presupuestos, si bien esta última acomoda su denominación y competencias al ámbito funcional propio de la Consejería competente en materia presupuestaria, en la actualidad Economía y Hacienda.

En consecuencia, al inicio de la VIII Legislatura, la Mesa de la Cámara adoptó el Acuerdo, en su reunión de 10 de julio de 2007, de constitución de las Comisiones Permanente, que se constituyeron originariamente en las respectivas sesiones celebradas con fecha de 16 de julio de 2007.

En 2008 se registraron varias modificaciones, formalizadas por Acuerdos de la Mesa de 23 y 30 de septiembre, así como en los años 2009 y 2010, consecuencia de las referidas reestructuraciones departamentales. El resultado es que, al cierre del año, fusionadas la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación en una sola (Acuerdo de Mesa de la Asamblea de 30 de marzo, editado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 184, de 7 de abril, páginas 17.739 y 17.740), la relación de órganos funcionales del género es la que sigue:

Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.
Vicepresidencia, Cultura y Deporte.
Presidencia, Justicia e Interior.
Presupuestos, Economía y Hacienda.
Transportes e Infraestructuras.
Educación.
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Sanidad.
Familia y Asuntos Sociales.
Empleo e Inmigración.
Mujer.
Juventud.

Por otra parte, a tenor del referido Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 10 de julio de 2007, debe tenerse presente que las Comisiones de la VIII Legislatura se componen de 18 miembros —esto es, uno más que en la Legislatura precedente—, distribuidos del siguiente modo: Grupo Parlamentario Popular, 10 —es decir, uno más que en la VII Legislatura—; Grupo Parlamentario Socialista, 6 —igual que en la VII Legislatura—; y Grupo Parlamentario Izquierda Unida, 2 —los mismos que en la VII Legislatura—.

Permanentes No Legislativas: de acuerdo con el artículo 72.2.b) del Reglamento de la Asamblea de Madrid y a tenor de su constitución originaria al inicio de la VIII Legislatura, en las respectivas sesiones celebradas con fecha de 16 de julio de 2007, no modificada posteriormente, dos han sido los órganos funcionales del género:

Vigilancia de las Contrataciones. El desarrollo de la sesión constitutiva de esta Comisión, impuesta por el artículo 72.2.b) del Reglamento, con detalle de la composición de su Mesa, se reproduce en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 22, páginas 247 a 248. Ha de tenerse presente que esta Comisión, por excepción, está compuesta, tan sólo, por nueve miembros, distribuidos a partes iguales entre los tres Grupos Parlamentarios, adoptando sus acuerdos en función del criterio del voto ponderado, según el número de Diputados con que cada Grupo cuente en el Pleno y siempre que sea idéntico el sentido en que hubieran votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes al un mismo Grupo.

Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Esta Comisión está establecida en el artículo 19 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público «Radio Televisión Madrid», en la redacción operada por la Ley 2/2000, de 11 de febrero. Su sesión constitutiva se reproduce, con detalle de su órgano rector, en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 20, páginas 231 a 234.

A las dos anteriores ha de añadirse la *Comisión Permanente No Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad*, creada por la primera

norma legal aprobada durante el año 2009, esto es, la Ley 1/2009, de 15 de junio. La Mesa, por su Acuerdo de 24 de junio, aprobó la constitución y composición de la Comisión Permanente No Legislativa —publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* de 25 de junio, número 141—. La Comisión se constituyó con fecha de 8 de julio de 2009, conforme reproduce el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 518, insertándose el Acuerdo en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 144, de 16 de julio.

No Permanentes de Investigación: durante el año considerado no se ha constituido una Comisión de Investigación, en los términos previstos por los artículos 74 y 75 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.

No Permanentes de Estudio: en los términos establecidos por los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, durante el año 2010 no se ha constituido ningún órgano funcional del género.

6.3. Ponencias constituidas

Al margen de las Ponencias constituidas en las respectivas Comisiones Permanentes Legislativas, con ocasión del procedimiento legislativo de tramitación de los proyectos de Ley finalmente aprobados por la Cámara durante el año 2010, no se ha constituido ninguna Ponencia específica.

6.4. Iniciativas legislativas

Proyectos de Ley (PL):

Presentados: 7.

Aprobados: 7.

Proposiciones de Ley (PropL):

Presentadas: 8, si bien una de ellas, la PropL 1/10, registrada en la Cámara con el referido número de orden, adolecía de defectos formales, por lo que no fue admitida a trámite por la Mesa; posteriormente volvió a ser presentada como PropL 2/10, de modificación de Ley de Protección de los Animales Domésticos en la Comunidad de Madrid, y la Mesa, considerando la no conformidad con la tramitación manifestada por el Gobierno, acordó interrumpir la tramitación, archivándola sin ulteriores actuaciones. La PropL 3/2010, de Modificación del Reglamento de la Asamblea de Madrid, fue rechazada en el trámite de toma consideración. La PropL 4/2010, para la creación de una Comisión Permanente No Legislativa de Inmigración y Coope-

ración al Desarrollo, fue también rechazada en el trámite de toma en consideración. La PropL 5/2010, de Reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, está pendiente de toma en consideración. La PropL 6/2010, para garantizar el principio genérico de no discriminación por identidad de género, fue rechazada en su toma en consideración. La PropL 7/2010, del Voluntariado, está pendiente de toma en consideración. Y la PropL 8/2010, de Creación del Colegio Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad de Madrid, está pendiente de toma en consideración. En consecuencia, una PropL no fue admitida a trámite —1/10—, otra ha decaído —2/10—, tres han resultado tramitadas y rechazadas —3, 4 y 6/10— y están pendientes otras tres de tramitación —5, 7 y 8/10—.

Aprobadas: 3 (correspondientes a iniciativas formalizadas en 2009) y 0 (de las presentadas en 2010).

6.5. Iniciativas parlamentarias no legislativas

Peticiones de Información (PI):

Presentadas 2.487.

Tramitadas 2.310.

No admitidas: 56.

Pendientes: 119.

Calificadas como PE: 1.

Retiradas: 1.

Preguntas:

De Contestación Oral en Pleno (PCOP):

Presentadas: 456.

Tramitadas: 317.

No admitidas: 38.

Transformadas: 31.

Retiradas: 70.

De Contestación Oral en Comisión (PCOC):

Presentadas: 318.

Pendientes: 1.

Tramitadas: 108.

No admitidas: 17.

Transformadas: 83.

Retiradas: 109.

Escritas (PE):

Presentadas: 621.

Pendientes: 21.
Tramitadas: 561.
No admitidas: 14.
Calificadas como PI: 21.
Retiradas: 4.

Interpelaciones (I):

Presentadas: 26.
Pendientes: 4.
Tramitadas: 17.
No admitidas: 1.
Retiradas: 4.

Mociones (M): presentadas 17; habiéndose tramitado las 17, resultando todas ellas rechazadas.

Proposiciones No de Ley (PNL):

Presentadas: 50.
Pendientes: 11.
Tramitadas: 31, resultando 18 rechazadas y 13 aprobadas.
No admitidas: 6.
Retiradas: 2.

Comparecencias (C): presentadas 583 y tramitadas 204, según el siguiente detalle:

En Pleno: se han sustanciado 46.

En Comisión: se han tramitado 158.

Comunicaciones del Gobierno (CG): presentadas 81; tramitadas 76.

6.6. Debates generales y resoluciones parlamentarias más importantes

Debates monográficos. Hemos destacado en anteriores informes que, a diferencia de las anteriores, la VII Legislatura no fue proclive a la celebración de “Debates monográficos” sobre asuntos de interés general de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos por el Título XV del Reglamento de la Cámara.

En la misma línea inició su andadura la VIII Legislatura, con la consecuencia de que ni durante 2007 ni a lo largo de 2008 se celebró ningún debate del género en la Asamblea de Madrid.

En 2009, sin embargo, se quebró dicha tendencia, celebrándose un “Debate monográfico sobre el paro y la situación económica en la Comunidad de Madrid”, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

De acuerdo con dicho precedente, en el año 2010 se ha celebrado en sesión plenaria de 23 de febrero un “Debate monográfico sobre la situación económica en la Comunidad de Madrid”, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

El debate se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid* número 630, páginas 18.215 a 18.258, publicándose las resoluciones aprobadas en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 180, de 4 de marzo, páginas 17.425 a 17.427.

Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno. Los días 14 y 15 de septiembre tuvo lugar la celebración del anual y coloquialmente conocido como “Debate sobre el estado de la Región” —formalmente “Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno”—, regulado en el Título XVI del Reglamento de la Asamblea de Madrid.

El debate se reproduce en el *Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid* número 734, páginas 21.257 a 21.325, publicándose las resoluciones aprobadas en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 208, de 23 de septiembre, páginas 19.595 a 19.599.

Declaraciones institucionales. En los términos establecidos por el Título XXI del Reglamento, con el precedente de las tres Declaraciones aprobadas en 2004, de las nueve aprobadas en 2005, de las cuatro de 2006, de las ocho de 2007, de las ocho de 2008 y de las seis de 2009, la Cámara en Pleno ha procedido durante el año 2010 a la aprobación de ocho Declaraciones institucionales:

Su relación, con detalle de su número de orden, de la fecha de la sesión plenaria de aprobación y del número y fecha del *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* (BOA, en lo sucesivo) de publicación es la siguiente:

- Declaración Institucional núm. 1/2010, de 11 de marzo, con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (BOA núm. 182, de 18 de marzo, páginas 17.677 a 17.678).
- Declaración Institucional núm. 2/2010, de 22 de abril, con motivo de la celebración del 23 de abril, Día Mundial del Libro (BOA núm. 188, de 29 de abril, página 18.213).
- Declaración Institucional núm. 3/2010, de 24 de junio, de condena a los países que no respetan los derechos de las personas y discriminan a los homosexuales (BOA núm. 202, de 1 de julio, página 19.362).
- Declaración Institucional núm. 4/2010, de 11 de noviembre, en el Día Internacional para la Tolerancia (BOA núm. 218, de 18 de noviembre, página 21.703 a 21.704).
- Declaración Institucional núm. 5/2010, de 11 de noviembre, sobre el violento desmantelamiento del campamento Saharai de Agdaym Izik por parte del Gobierno de Marruecos (BOA núm. 218, de 18 de noviembre, página 21.704 a 21.705).
- Declaración Institucional núm. 6/2010, de 18 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las

mujeres que se conmemora el 25 de noviembre (*BOA* núm. 220, de 25 de noviembre, página 21.804 a 21.805).

- Declaración Institucional núm. 7/2010, de 2 de diciembre, con motivo del Día 3 de Diciembre, Internacional de las Personas con Discapacidad (*BOA* núm. 222, de 9 de diciembre, página 22.016 a 22.017).
- Declaración Institucional núm. 8/2010, de 9 de diciembre, sobre la participación política de los inmigrantes (*BOA* núm. 224, de 16 de diciembre, página 22.097 a 22.098).

Resoluciones parlamentarias. Además de las declaraciones institucionales inmediatamente referidas, el Pleno de la Cámara ha aprobado durante el año 2010 un importante número de Resoluciones, si bien inferior al de los años precedentes, ascendiendo la cifra en 2008 a treinta y cuatro y en 2009 a veintiuna.

En concreto, diecisiete resoluciones en Pleno y dos resoluciones en Comisión.

Las resoluciones aprobadas por el Pleno, con detalle de su número de orden, de la fecha de la sesión plenaria de aprobación, de la iniciativa de la que trae causa, así como del número y fecha del *BOA* en el que se han publicado, es la siguiente:

- Resolución núm. 1/2010, de 11 de febrero, sobre la Proposición No de Ley 4/2010 RGEF.586, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez se dirija e inste al Gobierno de la Nación y, por extensión, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a que: 1.- Considerando como uso prioritario de agua el consumo humano, respete y reconozca los derechos de los pueblos de la zona de influencia de los embalses de Burguillo y San Juan al legítimo uso complementario del agua; 2.- Se apliquen los planes de sequía de las cuencas, de modo que el uso del agua para riego se armonice con otros usos de dicho recurso, y se tenga en cuenta a todos los municipios afectados de la Cuenca del Alberche por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Gobierno de España (*BOA* núm. 177, de 18 de febrero, página 17.235).
- Resolución núm. 2/2010, de 23 de febrero, en relación con el debate monográfico sobre la situación económica en la Comunidad de Madrid (*BOA* núm. 180, de 4 de marzo, página 17.425 a 17.427).
- Resolución núm. 3/2010, de 4 de marzo, sobre la Proposición No de Ley 63/2009 RGEF.5981, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a elaborar un Plan Nacional de Centros de Tecnificación Deportiva en función de la realidad actual de las distintas modalidades deportivas y dirigido a atender las necesidades de los deportistas de alto nivel estatal y autonómicos (*BOA* núm. 181, de 11 de marzo, página 17.521).

- Resolución núm. 4/2010, de 11 de marzo, sobre la Proposición No de Ley 9/2010 RGE.1310, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que la Asamblea de Madrid solicita al Gobierno de la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno de la Nación a: Disolver la Sociedad Pública del Alquiler, distribuir entre las Comunidades Autónomas los fondos que el Estado destina a la gestión de la Sociedad Pública de Alquiler e ir más allá de las tímidas reformas recientemente realizadas en la normativa que regula la relación arrendaticia, para crear un marco de confianza que realmente facilite la salida al mercado de las viviendas disponibles (*BOA* núm. 182, de 18 de marzo, página 17.625).
- Resolución núm. 5/2010, de 18 de marzo, sobre la Proposición No de Ley 64/2009 RGE.6004, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Región a: 1.- Continuar avanzando en la prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos en la Comunidad de Madrid; 2.- Reforzar los mecanismos de evaluación en las actuaciones preventivas; 3.- Diseñar actuaciones que partan de modelos teóricos acreditados y con base en la evidencia científica y 4.- Impulsar acciones de sensibilización social, en los términos relacionados (*BOA* núm. 183, de 25 de marzo, página 17.683).
- Resolución núm. 6/2010, de fecha 8 de abril, sobre la Proposición No de Ley 13/2010 RGE.1715, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para reclamar la urgente reforma de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, con las especificaciones que se relacionan (*BOA* núm. 186, de 15 de abril, página 18.027).
- Resolución núm. 7/2010, de 15 de abril, sobre la Proposición No de Ley 57/2009 RGE.5309, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que la Asamblea de Madrid solicita al Gobierno regional que se dirija al Gobierno de la Nación, instándole a establecer la financiación necesaria para la aplicación en todo el territorio nacional del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así como hacer público el calendario de su implantación y las medidas necesarias para garantizar la coordinación y la calidad de su aplicación (*BOA* núm. 187, de 22 de abril, página 18.063).
- Resolución núm. 8/2010, de 22 de abril, sobre la Proposición No de Ley 20/2010 RGE.2797, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno regional a que se dirija al Gobierno de la Nación requiriéndole para que realice las actuaciones necesarias para hacer posible la eliminación de la subida del IVA que se aprobó a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio (*BOA* núm. 188, de 29 de abril, página 18.115).

- Resolución 9/2010, de 13 de mayo, sobre la Proposición No de Ley 21/2010 RGEF.2798, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- La elaboración del I Plan Regional de Trastornos del Espectro Autista (TEA), incluido dentro del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad; 2.- Incorporar a la Federación Autismo Madrid, como principal grupo de asociaciones que representan a los familiares de personas con TEA, en el cronograma de trabajo, elaboración, puesta en marcha y evaluación de dicho plan; 3.- Optimizar, coordinar y mejorar los recursos existentes para avanzar en una transversalidad efectiva y en la plena integración de personas con TEA desde las áreas de sanidad, educación, servicios sociales, empleo, ocio y deportes, y 4.- Continuar en la mejora de la sensibilización y concienciación social, fomentando actitudes receptivas hacia las personas con TEA (*BOA* núm. 191, de 20 de mayo, página 18.353).
- Resolución núm. 10/2010, de 20 de mayo, sobre la Proposición No de Ley 23/2010 RGEF.3326, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que la Asamblea de Madrid solicita al Gobierno regional que se dirija al Gobierno de la Nación instándole a que ponga en marcha con carácter inmediato el Sistema Cospol Internet Abusive Material Proyet, (Circamp), para impedir el acceso a las páginas web que contengan pornografía Infantil; e insta al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias y reforzar las existentes para combatir el ciberacoso a menores o “child grooming”, promoviendo, además una mayor implicación de los operadores cibernéticos” (*BOA* núm. 192, de 27 de mayo, página 18.417).
- Resolución núm. 11/2010, de 15 de septiembre de 2010, en relación con el Debate sobre la Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 14 y 15 de septiembre de 2010 (*BOA* núm. 208, de 23 de septiembre, página 19.595 a 19.599).
- Resolución núm. 12/2010, de 14 de octubre, sobre la Proposición No de Ley 19/2010 RGEF.2796, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno regional a solicitar del Gobierno de la Nación la efectiva colaboración y cooperación para prestar la atención y protección de los madrileños residentes en el extranjero, en la forma más eficaz y eficiente, proporcionando los datos requeridos del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) a la Administración Autónoma de Madrid (*BOA* núm. 212, de 21 de octubre, página 19.728).
- Resolución núm. 13/2010, de 21 de octubre, sobre la Proposición No de Ley 32/2010 RGEF.4875, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno regional a que se dirija al Gobierno de la Nación requiriéndole que recoja en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 las inversiones que la Comunidad de Madrid necesita, de tal manera que se corrija el déficit presupuestario de

- los últimos siete ejercicios, en especial las inversiones relativas a los proyectos no iniciados o paralizados que se relacionan (*BOA* núm. 214, de 28 de octubre, página 19.833).
- Resolución núm.14/2010, de 4 de noviembre, sobre la Proposición No de Ley 39/2010 RGEF.5116, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que por parte del Ministerio de Cultura se incoe expediente de declaración de la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural con carácter etnográfico; y para que se inicien gestiones con las Administraciones responsables del fomento y protección de la cultura en Francia, Portugal, México, Colombia, Ecuador y Perú, así como con los organismos internacionales correspondientes, para que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO incluya en su listado a la Fiesta de los Toros (*BOA* núm. 217, de 11 de noviembre, página 21.657).
 - Resolución núm. 15/2010, de 11 de noviembre, sobre la Proposición No de Ley 42/2010 RGEF.5255, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez se dirija e inste al Gobierno de la Nación a que: 1.- Mantenga la dotación necesaria en las partidas presupuestarias correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 que permita dar continuidad a la cofinanciación de las actuaciones contempladas en el Plan Avanza; y 2.- No se paraliquen por falta de la financiación adecuada los proyectos ya iniciados y aquéllos que ya están diseñados para su ejecución (*BOA* núm. 218, de 18 de noviembre, página 21.693).
 - Resolución núm.16/2010, de 18 de noviembre, sobre la Proposición No de Ley 41/2010 RGEF.5254, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez se dirija e inste al Gobierno de la Nación a que: 1.- Modifique las partidas presupuestarias relacionadas con las inversiones del “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015” (PNCA) en la Comunidad de Madrid en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, contemplando una inversión de al menos 78,4 millones de euros anuales en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014; y 2.- Ejecute antes de 2015 los 451 millones de euros de inversión comprometida en el PNCA en la Comunidad de Madrid (*BOA* núm. 220, de 25 de noviembre, página 21.775).
 - Resolución núm. 17/2010, de 9 de diciembre, sobre la Proposición No de Ley 47/2010 RGEF.5601, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que garantice que el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales disponga en 2011 de una financiación adecuada a la actual realidad social mediante un aumento de los créditos aportados por la Administración General del Estado a este Plan que supere lo aportado en el año 2010, al tratarse de una partida que afecta a las personas más vulnerables e influye directa-

mente en el funcionamiento de los Servicios Sociales municipales (BOA núm. 224, de 16 de diciembre, página 22.073).

Las dos referidas resoluciones de Comisión son las siguientes:

- Resolución núm. 1/2010 de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 20 de abril, sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 2008 (BOA núm. 188, de 29 de abril, página 18.115 a 18.117).
- Resolución núm. 1/2010 de la Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte, de 16 de junio de 2010, previo debate de la Proposición No de Ley 26/2010 RGEP.3520, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, instando al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, proceda a la declaración del Hospital de San Carlos de Aranjuez como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico (BOA núm. 200, de 24 de junio, página 19.185).

6.7. Reformas del Reglamento de la Asamblea de Madrid

Los *interna corporis acta* aprobados por el Pleno de la Cámara en sesión extraordinaria de 30 de enero de 1997 —editados en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* del siguiente día 31, número 82— estuvieron vigentes sin modificación alguna hasta el año 2009.

En dicho año se produjo la primera reforma del Reglamento del Parlamento autonómico, tendente a la creación de la figura del “Diputado no adscrito”, con la finalidad de dar una solución, distinta a la de su integración en el Grupo Mixto, a la situación de los tres diputados regionales imputados judicialmente en el caso *Gürtel*.

En el año aquí considerado el Grupo Parlamentario Socialista formalizó la Proposición de Ley 3/2010 (RGEP 1842), de Modificación del Reglamento de la Asamblea de Madrid, publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 185, de 8 de abril, páginas 17.989 a 17.999. La misma, sin embargo, fue rechazada por el Pleno de la Cámara en el trámite de su toma en consideración, procediéndose a su archivo sin ulterior actuación.

6.8. Normas interpretativas y supletorias del Reglamento de la Asamblea de Madrid

Durante el año 2010 debe destacarse, como norma complementaria del Reglamento de la Cámara, la Resolución de la Presidencia de la Asamblea, de fecha 27 de abril, sobre el procedimiento para el control del cumplimiento del

principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 188, de 29 de abril, páginas 18.211 a 18.213).

Su tenor literal, que se reproduce aquí por su trascendencia práctica, es el siguiente:

“Primero.- Los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea que se recibían en la Asamblea de Madrid para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad, tendrán la consideración de asuntos urgentes.

Segundo.- Una vez recibido en la Cámara el proyecto de acto legislativo de la Unión Europea, el Presidente de la Asamblea de Madrid lo remitirá al Presidente de la Comisión encargada del control parlamentario de los asuntos comunitarios europeos para que, dentro de los dos días siguientes, convoque a la Mesa de la Comisión, haciendo llegar a sus miembros el proyecto legislativo recibido.

Tercero.- En dicha reunión, la Mesa de la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos procederá:

—A convocar sesión de la Comisión dentro de los cinco días siguientes.

—A fijar el calendario de trabajos para la realización del control del cumplimiento del principio de subsidiariedad, solicitando a la Mesa de la Asamblea habilitación para la celebración de cuantas sesiones extraordinarias de la Comisión sean necesarias.

—A proponer a la Mesa, cuando así lo estimare oportuno, la constitución de una ponencia en el seno de la Comisión encargada de elaborar un Informe en el que se verifique el cumplimiento del principio de subsidiariedad en el proyecto de acto legislativo, estableciendo sus normas básicas de organización y funcionamiento.

—A requerir, en ejercicio de las funciones del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid cuando las tuviere delegadas por la Comisión, al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, dentro de los cinco días siguientes remita, si lo estima oportuno, informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad en la propuesta de acto legislativo.

Cuarto.- La Mesa de la Asamblea, en la primera reunión que celebre tras la recepción de la propuesta de la Comisión, resolverá sobre los extremos planteados por la Mesa de la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos en virtud de lo dispuesto en la norma anterior.

Quinto.- La Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos procederá en los cinco días siguientes a la celebración de la reunión de la Mesa a que se refiere la norma tercera, a la designación de ponencia, cuando proceda.

Sexto.- La ponencia constituida en el seno de la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos dispondrá de un plazo máximo de tres días para la elaboración de un informe de verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad en el proyecto de acto legislativo de la Unión Europea.

Séptimo.- Una vez elaborado el informe de ponencia o concluido el plazo a que se refiere la norma anterior, el Presidente de la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos convocará la Mesa de la misma en un plazo máximo de 48 horas para que proceda a fijar sesión de Comisión dentro de los tres días siguientes y a acordar el orden del día de la misma que, en todo caso, deberá comprender el debate y votación del informe de Ponencia para su aprobación, en su caso, como Dictamen de la Comisión.

Octavo.- El Dictamen de la Comisión será remitido a la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación.

Noveno.- Cuando la Mesa de la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos no acuerde proponer a la Mesa de la Asamblea la designación de ponencia para que elabore un informe de verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte del proyecto de acto legislativo de la Unión Europea, la Comisión encargada del control parlamentario de asuntos comunitarios europeos deberá aprobar su Dictamen al respecto en la sesión fijada dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la reunión de la Mesa a que se refiere la norma tercera.”

6.9. Instituciones similares al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo

6.9.1. Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

A diferencia de otras Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid optó por no crear una institución consultiva similar al Consejo de Estado en su ámbito territorial. Dicha opción, sin embargo y en los términos detallados en nuestro Informe correspondiente al año 2007, se abandonó al inicio de la vigente VIII Legislatura: el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión de 20 de diciembre de 2007, aprobó la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid —publicada en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 28 de diciembre, número 309—. Su normativa reguladora fue complementada con el Decreto 26/2008, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid —publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 21 de julio, número 172—.

El Consejo Consultivo inició su funcionamiento en el verano de 2008 y es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como de los organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la misma. Los asuntos dictaminados por el mismo no podrán ser sometidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución de la Comunidad, de las entidades locales o de las universidades públicas.

Por lo que respecta a su composición, que en el año 2009 pasó de seis a ocho Secciones, se ha mantenido durante el año 2010. Su Presidencia la sigue ostentando el Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala —Decreto 27/2008, de 10 de abril, *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* de 11 de abril—, y sus actuales Consejeros son los siguientes:

- Consejero Permanente: Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán.
- Consejeros Electivos:
 - Excmo. Sr. D. Ismael Bardisa Jordá.
 - Excma. Sra. D.^a Rosario Laina Valenciano.
 - Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz.
 - Excmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez.
 - Excma. Sra. D.^a Cristina Alberdi Alonso.
 - Excmo. Sr. D. Javier M^a Casas Estévez.
 - Excma. Sra. D.^a María José Campos Bucé.
 - Excmo. Sr. D. Andrés de la Oliva Santos.
- Secretario General: Ilmo. Sr. D. José Luís Cádiz Deleito.

6.9.2. *Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid*

Respecto del ámbito de la fiscalización económico—financiera, sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal de Cuentas del Reino —a tenor de lo dispuesto por los artículos 136.1 y 153.d) de la Constitución y, en su desarrollo, por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y por la Ley 7/1988, de 5 de abril—, la Comunidad de Madrid, al amparo de su autonomía financiera, creó un órgano propio de fiscalización externa de sus cuentas, la Cámara de Cuentas, establecida por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía —en los términos de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio— y regulada por la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid —*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 112, de 13 de mayo de 1999—, así como por lo establecido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 1/2004, de 31 de Mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004.

La Cámara de Cuentas comenzó su andadura el 18 de diciembre de 2000, estando conformada por su Presidente, el Excmo. Sr. D. Manuel Jesús González González, su Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Carlos Salgado Pérez, y cinco Consejeros:

- Ángel Luis del Castillo Gordo.
- Marino Díaz Guerra.
- Emilio García Horcajo.
- M.^a Victoria Malavé Verdejo.
- Concepción Ruano Puente.

Su Secretaria General es la Ilma. Sra. Dña. Pilar Muñoz González.

Respecto de su actividad en el año objeto de la presente crónica, lo primero que

ha de recordarse es la Memoria Anual de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2009, aprobada por el Consejo de la Cámara de Cuentas el 28 de diciembre de 2009.

Por lo que respecta a su función fiscalizadora, durante el año 2010 se han aprobado en las distintas sesiones del Consejo los informes que se señalan a continuación, siendo remitidos a la Asamblea de Madrid, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 11/1999, de 29 de abril:

- Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, ejercicio 2009. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 29 de diciembre de 2010 y remitido el 29 de diciembre de 2010.
- Fiscalización de las transferencias corrientes y de capital concedidas por la Administración de la Comunidad de Madrid a las Corporaciones Locales con cargo a los artículos presupuestarios 46 y 76, ejercicio 2008. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 29 de diciembre de 2010 y remitido el 29 de diciembre de 2010.
- Fiscalización de la actividad económica-financiera de la Universidad Complutense de Madrid y de sus entidades dependientes, ejercicio 2008. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 29 de diciembre de 2010 y remitido el 29 de diciembre de 2010.
- Fiscalización del Ayuntamiento de Algete, ejercicios 2004 a 2006. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 29 de diciembre de 2010 y remitido el 29 de diciembre de 2010.
- Análisis del cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas del sector público madrileño definido en el artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, ejercicio 2009. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 29 de diciembre de 2010 y remitido el 29 de diciembre de 2010.
- Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales, ejercicio 2008. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 18 de noviembre de 2010 y remitido el 19 de noviembre de 2010.
- Fiscalización de la actividad económica de la Empresa Hispanagua, S.A., ejercicios 2005 a 2007. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 27 de julio de 2010 y remitido el 29 de julio de 2010.
- Fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, ejercicios 2005 a 2007. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 27 de julio de 2010 y remitido el 29 de julio de 2010.
- Fiscalización del programa presupuestario 750 "Atención especializada del Servicio Madrileño de Salud", ejercicio 2007. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 11 de junio de 2010 y remitido el 17 de junio de 2010.
- Fiscalización del Ayuntamiento de Galapagar, ejercicios 2004 a 2006. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 11 de junio de 2010 y remitido el 17 de junio de 2010.
- Fiscalización del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, ejercicios 2005 a 2007. Aprobado en la sesión del Consejo celebrada el 28 de enero de 2010 y remitido el 29 de enero de 2010.

6.9.3. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid

Presupuestas las funciones que son propias del Defensor del Pueblo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución y, en su desarrollo, por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula la institución, la Comunidad de Madrid, como complemento especializado para el impulso y el reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad, creó un Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid, el Defensor del Menor. La institución, ya prevista en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, se concretó jurídicamente en la Ley 5/1996, de 8 de julio —*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* número 169, de 17 de julio de 1996—, cuyas prescripciones han de complementarse con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, aprobado por la Mesa de la Asamblea de Madrid en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 1997 —*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 135, de 26 de noviembre de 1997—. El Defensor del Menor, de oficio o a instancia de parte, puede supervisar la actividad de todas las Administraciones de la Comunidad, así como de todas las entidades, personas físicas, empresas, asociaciones, fundaciones o cualesquiera otras personas jurídicas que presten servicios a los menores, de manera continua u ocasional, aunque no sea ésta su función esencial.

Habiéndose producido la designación del titular de la institución, conforme a lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley 5/1996, en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid celebrada el día 8 de noviembre de 2006, Arturo Canalda González continúa en el ejercicio de su mandato, cuya duración es de cinco años.

Por lo que respecta a la actividad del Defensor durante el año considerado, destaca, en los términos establecidos por los artículos 35 y 37 de su Ley reguladora, en relación con el artículo 3 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, el “*Informe anual del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009*”. En los términos recogidos en el mismo, en el año 2009 se tramitaron un total de 2.092 expedientes relacionados con posibles vulneraciones de los derechos de la infancia y la adolescencia, y el Comisionado formuló durante ese mismo año un total de 60 resoluciones con carácter de recomendaciones, propuestas y orientaciones formuladas a las Administraciones y entidades públicas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, el referido Informe, publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* número 199, de 22 de junio, fue objeto de consideración por el Pleno de la Cámara, con exposición inicial por parte del Defensor del Menor, en su reunión de 24 de junio de 2010, recogida en el *Diario Oficial de la Asamblea de Madrid* número 726, páginas 21.143 a 21.155.